



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

AUTOEVALUACIÓN PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (UNCAC) EN CHILE

Revisión de los Capítulos II y V



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

AUTOEVALUACIÓN PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (UNCAC) EN CHILE

Revisión de los Capítulos II y V

Este libro ha sido financiado por el Fiduciario Temático para la Gobernabilidad Democrática (DGTTF) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

**AUTOEVALUACIÓN PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA DE LA CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (UNCAC) EN CHILE**

Revisión de los Capítulos II y V

Primera edición: 2014

ISBN: 978-956-7469-58-1

PROYECTO "AUTOEVALUACIÓN PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNCAC EN CHILE"

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Dag Hammarskjöld 3241.

Teléfono: (56-2) 2654 1000. Santiago - Chile.

Redacción

Rocio Noriega

Edición

Mauricio Muñoz y Patricia Arriagada

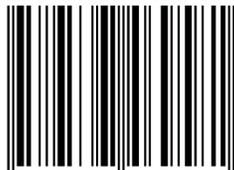
Diseño

David Barake

Impreso en Chile

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones del PNUD.
Se autoriza el uso de la información contenida en la presente obra citando la fuente.

ISBN 978-956-7469-58-1



9 789567 469581 >

ÍNDICE

Introducción General	4		
Proyecto	5		
<hr/>			
Capítulo II de la UNCAC	7	Capítulo V	23
Artículo 5 de la UNCAC	9	Introducción al Capítulo V	25
Artículo 6 de la UNCAC	11	Rol de las instituciones públicas en Chile en materia de recuperación de activo	26
Artículo 7 de la UNCAC	12	Consejo de Defensa del Estado (CDE)	26
Artículo 8 de la UNCAC	14	Contraloría General de la República (CGR)	26
Artículo 9 de la UNCAC	15	Dirección General de Crédito	
Artículo 10 de la UNCAC	16	Prendario (DICREP)	26
Artículo 11 de la UNCAC	17	Poder Judicial	27
Artículo 12 de la UNCAC	18	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	27
Artículo 13 de la UNCAC	19	Ministerio Público (MP)	27
Artículo 14 de la UNCAC	20		
Conclusiones Capítulo II	21	Capítulo V de la UNCAC	28
		Artículo 51 de la UNCAC	28
		Artículo 52 de la UNCAC	28
		Artículo 53 de la UNCAC	31
		Artículos 54, 55 y 56 de la UNCAC	32
		Artículo 57 de la UNCAC	33
		Artículo 58 de la UNCAC	34
		Artículo 59 de la UNCAC	34
		Conclusiones Capítulo V	35
		Anexo I. Metodología	37
		Anexo II. Estadísticas	47
		Anexo III. Campaña de Difusión	55

Introducción General

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC por su sigla en inglés)¹ en Chile es un esfuerzo conjunto de la Contraloría General de la República (CGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene por objetivo evaluar las políticas de prevención de la corrupción en Chile en relación con los requisitos prescritos por el Capítulo II de Medidas de Prevención de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Capítulo V de Recuperación de Activos.

La Convención es uno de los instrumentos internacionales más importantes para combatir la corrupción por la importancia de los temas que incorpora, puesto que marca una tendencia de lucha global contra la corrupción y la implementación de regulaciones de transparencia, prevención de la corrupción, recuperación de activos producto de la corrupción, medición de las políticas públicas implementadas, aplicación de medidas preventivas en el sector privado, promoción del control social con la participación ciudadana y el impulso a la cooperación internacional. Además, complementa otros acuerdos internacionales sobre la materia como son la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales.

¹ La UNCAC se firmó el 9 de diciembre de 2003 en Mérida, México, entrando en vigor el 14 de diciembre de 2005. La Convención ha sido firmada por 160 países y 140 la han ratificado, entre ellos Chile (13 Septiembre de 2006).

Proyecto

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la UNCAC” se inició en marzo de 2012, y se enmarca dentro del programa “Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la Gestión Pública de Chile a través de la Cooperación Internacional y el Seguimiento de la UNCAC” realizado también en conjunto con la CGR y el PNUD desde hace más de tres años.

El proyecto tiene por objetivo desarrollar por primera vez en Chile una revisión participativa del cumplimiento de los Capítulos II y V de la UNCAC. En la primera parte de su desarrollo se realizó la revisión del Capítulo II, efectuándose un diagnóstico de la situación del país respecto a la prevención de la corrupción y, conjuntamente, se formularon propuestas para mejorar la legislación o políticas públicas de prevención de la corrupción en Chile. Al mismo tiempo y para poder avanzar con mayor rapidez, se propusieron la utilización de buenas prácticas en la ejecución misma del proyecto, tales como publicar en línea la agenda de las autoridades con los datos de la reunión (personas, empresas/instituciones y motivo). La misma metodología y resultados fueron utilizados en la revisión del Capítulo V.

Este proyecto es considerado innovador porque se planteó desde una perspectiva participativa, invitando al sector público, al sector privado y a la sociedad civil organizada, donde los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones y propuestas en once mesas de trabajo (con un total de 42 horas aproximadamente)². Adicionalmente, un ejercicio participativo como el llevado a cabo fortalece la confianza entre los actores, ampliando las oportunidades de cooperación y coordinación en el largo plazo.

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la UNCAC” se puso públicamente en marcha el 10 de mayo de 2012, en un evento presidido por el Contralor General de la República, Sr. Ramiro Mendoza, y el Coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del PNUD, Sr. Antonio Molpeceres. Los pasos seguidos para llevar a cabo las mesas de trabajo se explican con detalle en el Anexo 1 de Metodología.

En este Informe se entregan las principales conclusiones del debate desarrollado en dichas mesas.

² Esto también diferencia al proyecto de otras iniciativas internacionales, ya que de acuerdo a las investigaciones de la experiencia comparada, los grupos de interés se reúnen un par de veces como espectadores y no hay tanto tiempo para realizar debates entre los actores.

CAPÍTULO II

Capítulo II de la UNCAC

Artículo 5 de la UNCAC

El artículo enuncia actividades sobre políticas y prácticas de prevención de la corrupción que deben existir en los Estados Parte, por ejemplo, formular, aplicar y mantener en vigor medidas coordinadas que promuevan la participación de un mayor número de actores sociales en las actividades de lucha contra la corrupción, establecer prácticas eficaces contra la corrupción; evaluar las medidas implantadas contra la corrupción y colaborar entre los Estados Parte y otras organizaciones internacionales y regionales.

En la Mesa del Sector Público se destacó la publicación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado mejor conocida como Ley de Transparencia³. Se concordó que la Ley de Transparencia ha sido un gran avance para el país y que se ha fortalecido la probidad gracias a la transparencia. También se resaltó el rol del Consejo para la Transparencia como órgano garante del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, el escollo es que la ciudadanía desconoce la citada Ley de Transparencia, por lo que se requiere diseñar un mecanismo para que sea conocida por las personas y se perciban adecuadamente su uso y beneficios.

Por su lado, respecto a su rol de prevención, la CGR lo cumple por medio del control de la juridicidad de los actos administrativos (nombramiento del personal, aplicación de medidas disciplinarias, ascensos, planos reguladores, bases administrativas, etcétera), la emisión de dictámenes y las auditorías.

Otro punto destacado fue la publicación de la Ley de Contratación Pública⁴ para las Compras del Estado, así como el marco del Acuerdo de Colaboración con la CGR con el que se implementó un módulo en el sitio web de ChileCompra⁵ que recibe denuncias por falta de pago oportuno o por eventuales irregularidades en una contratación⁶. Igualmente, en diciembre 2011 se constituyó el Consejo Público-Privado de Integridad en los Proveedores del Mercado Público, que tiene como objetivo generar una propuesta de acciones para reforzar las prácticas de integridad en los proveedores que hacen negocios con el Estado.

En la Mesa del Sector Privado también se reconocieron en términos generales los esfuerzos realizados por el Estado de Chile en los últimos años en la promoción de la transparencia, en especial la Ley de Transparencia; sin embargo, se percibía un comportamiento irregular en la agenda pública en temáticas de corrupción y su prevención.

3 | La Ley de Transparencia (Ley N° 20.285) entró en vigencia a partir del 20 de abril de 2009, ya que el artículo transitorio estableció su entrada en vigor ocho meses después de su publicación en el Diario Oficial.

4 | Ley N° 19.886, Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, disponible en el siguiente link: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004&buscar=19886>. En 2011 se transaron en el mercado público más de US\$8.000 millones, con cerca de 2 millones de órdenes de compra anuales emitidas por parte de los 900 organismos públicos que utilizan este sistema de compras públicas (Fuente: Dirección de Compras Públicas).

5 | El Módulo de Probidad en Compras Públicas está en el siguiente link: http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=444

6 | Del total de reclamos ingresados (2.856) durante el segundo trimestre de 2012, el 52,56% (1.501) corresponde a reclamos por irregularidades potenciales y 47,44% (1.355) a reclamos por no pago oportuno. Fuente: Chile Compra. La información sobre reclamos se encuentra en el siguiente link: www.analiza.cl

En la Mesa Mixta se discutió ampliamente la necesidad de tener una sola organización anti-corrupción, concluyéndose que debido al marco jurídico chileno, a que hay varios órganos de prevención y/o combate de la corrupción autónomos y a los diversos roles de cada uno, no era plausible. Por lo que la sociedad civil propuso que una de las entidades tomara el liderazgo de coordinación para que exista una mejor articulación entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Por ejemplo, que se formara una comisión como la que se integró en este proyecto y se reunieran cuatro veces al año para intercambiar información y coordinar esfuerzos de prevención de la corrupción. También se acordó que se requería un mapa de todas las instituciones vinculadas a la prevención o lucha contra la corrupción, especificando las regulaciones y atribuciones de estos órganos y su rol específico en estas áreas⁷.

Otro tema ampliamente debatido fue la necesidad de implementar una Agenda de Probidad Nacional que no fuera la mera respuesta a alguna crisis, sino que fuera de largo plazo y que incluyera, además, al mundo municipal. Por otro lado, se enfatizó la importancia del rol ciudadano de levantar temas que se pudieran incluir en la agenda pública, estableciendo prioridades y trabajo conjunto. Se enfatizó la necesidad de que la Agenda fuera difundida ampliamente, para el conocimiento de los ciudadanos y su participación activa.

También se habló de la necesidad de fomentar los procesos de inducción y capacitación de los funcionarios públicos en términos de transparencia y probidad, sistematizando estándares para que exista un aprendizaje real y que éste se compruebe, por ejemplo, por medio de pruebas anuales.

Se expresó que para lograr la prevención de la corrupción era primordial educar a la ciudadanía, por lo que habría que apoyar el esfuerzo del Ministerio de Educación que ha estado distribuyendo materiales creados por Chile Transparente en 1377 liceos subvencionados para fomentar y apoyar la Educación Cívica. También se propuso realizar una campaña de corto plazo resaltando las actitudes poco éticas que realizan en su vida cotidiana los ciudadanos y, posteriormente, una campaña formativa sobre estos temas para niños. En el marco de este proyecto, se realizó una campaña de difusión que es explicada con mayor detalle en el Anexo 3.

Finalmente, la UNCAC establece la necesidad de medir los resultados de las acciones de prevención que se llevan a cabo; en este sentido, se propuso desarrollar indicadores duros, no de percepción, para realizar esta medición, comprometiéndose varias de las instituciones en proveer los datos que apoyen esta tarea. Sin embargo, se destacó la importancia del factor humano que ingresa los datos a los diversos formularios de las instituciones, por lo que se propone realizar los indicadores y capacitar a las personas para levantar las cifras o información correctas. En el marco de este proyecto, un grupo de trabajo integrado por algunos de los participantes de las mesas, propuso establecer estadísticas para efectuar el seguimiento de la UNCAC y de otros instrumentos internacionales, procedimientos que se exponen en el Anexo 2.

7 | Esta herramienta será uno de los productos de este proyecto.

Artículo 6 de la UNCAC

Este artículo establece la creación o mantenimiento de un órgano u órganos, independiente (s) encargado (s) de prevenir la corrupción de acuerdo al ordenamiento jurídico del país. Se debe promover la participación de la sociedad y concienciarla de la existencia de la entidad o entidades que luchan contra la corrupción. Igualmente, la(s) institución(es) debe(n) contar con recursos económicos para llevar a cabo capacitaciones del personal especializado en prevención y combate de la corrupción. Finalmente, el/los organismos debe (n) supervisar y coordinar las medidas que se implementen en la prevención contra la corrupción.

En las Mesas de Trabajo del Sector Público y Privado se reconoció la presencia de varios órganos encargados de prevenir la corrupción en Chile, sin embargo, no se percibía un liderazgo claro en la materia, tal como señaló en el acápite anterior.

Se consideró que falta trabajo en el campo de la promoción de la participación ciudadana en términos de transparencia, probidad y prevención de la corrupción. Se opinó que existe desconocimiento por parte de la ciudadanía de las leyes, de cuáles son órganos encargados y acerca de los pasos a seguir ante eventuales situaciones de faltas a la probidad.

Por otro lado, se destacaron los distintos convenios entre varios organismos públicos para promover la probidad y la transparencia⁸.

También se destacó el proyecto realizado por la Contraloría denominado “Contraloría y Ciudadano”, que tiene por objetivo promover la participación ciudadana sobre la gestión vinculada a la Función de Control Externo de esta entidad a través de la recepción y análisis de denuncias en línea y sugerencias de fiscalización. Las denuncias recibidas en el Portal creado al efecto han ido en aumento recibiendo desde su inicio, en septiembre de 2012 y hasta abril de 2013, un total de 1.070 denuncias y 200 sugerencias de fiscalización.

En la Mesa Mixta hubo acuerdo en la necesidad de reforzar la capacitación de funcionarios públicos en materias de probidad y transparencia. Se mencionó la carta compromiso que deberán firmar todas las personas que ingresen al Poder Ejecutivo, de acuerdo a las obligaciones tomadas por Chile en la Iniciativa de Gobierno Abierto; sin embargo, la sociedad civil expresó que no bastaba la firma para acreditar el conocimiento de las distintas regulaciones de probidad y transparencia, sino que podría ser factible que anualmente se realizara un examen de conocimientos como se hace en otros países y en algunas empresas y, de esta forma, se demuestre el conocimiento real de los funcionarios. También se propuso crear un código con todos los principios, sin que fuera muy detallado, pero que incluyera los dilemas a los que se pueden enfrentar los funcionarios en sus diversas funciones y en su entidad específicamente. Un punto que se debe analizar es la inclusión en los contratos del personal a honorarios la obligatoriedad de las capacitaciones en áreas de probidad y transparencia.

8 | Convenio Contraloría-Ministerio Público.-Algunas de las actividades de cooperación contempladas en el Convenio son capacitaciones de funcionarios de la CGR en temas de corrupción, la creación de un formato modelo para recibir denuncias penales relacionadas con la corrupción, el acceso a las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios públicos cuando el Ministerio Público lo requiera, entre otras actividades. El Convenio está disponible en el siguiente link: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/ARC_150701_01

Convenio Contraloría-ChileCompra.-Dentro de las actividades de cooperación contempladas en el Convenio se encuentra el intercambio de información respecto de las bases de datos del Sistema de Compras, auditorías practicadas por la Contraloría General a los procesos de adquisiciones y contrataciones de las entidades públicas y el Módulo de Probidad en las Compras Públicas. El Convenio está disponible en el siguiente link: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/ARC_150701_01

Se propuso realizar una campaña ciudadana en términos de probidad y transparencia para fomentar la participación de la ciudadanía y el control ciudadano, además de instalar en el currículo educativo un curso formativo de educación ciudadana para difundir los derechos de transparencia y actitudes éticas.

La sociedad civil propuso la revisión de la integración e independencia de las comisiones de ética y transparencia de ambas cámaras del Congreso Nacional, por ejemplo, que sea una comisión escogida por un sistema de selección independiente y que los integrantes no sean senadores o diputados en ejercicio por los conflictos de intereses que esto implicaría y que goce de la autonomía necesaria⁹.

Artículo 7 de la UNCAC

Este artículo establece que los Estados Parte deberán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación basados en el mérito, la equidad y la aptitud, de empleados públicos y de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas; se deben considerar los cargos vulnerables a la corrupción y tener procedimientos de prevención, por ejemplo, la rotación de cargos. Señala que se deben adoptar medidas encaminadas a establecer criterios para las candidaturas y elección de cargos públicos; adoptar medidas para aumentar la transparencia respecto al financiamiento de candidaturas a cargos públicos electivos y de partidos políticos; adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses o a mantener y fortalecer dichos sistemas; y que exista supervisión y coordinación de las medidas adoptadas.

La Mesa Mixta señaló que si bien existen normativas que intentan promover la transparencia en los sistemas de convocatoria, contratación y retención, entre otros, estas regulaciones no serían cumplidas a cabalidad; por tanto, se sugiere diseñar criterios estandarizados y transparentes.

Asimismo, hubo consenso en que se incluyan más servicios (municipalidades, programas que manejen fondos públicos, etc.) en el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).

Se debatió que aunque el SADP necesita mejoras, bien aplicado puede garantizar que si una persona cumple sus metas laborales de forma efectiva, ésta no sea despedida o solicitada su renuncia por cambio de administración. En este mismo sentido, se destacó la necesidad de transparentar los cargos en los que el filtro de la “confianza” es aplicable, y eliminar este filtro de los otros cargos donde no es necesaria para fomentar la carrera por mérito dentro del Servicio Civil. Igualmente, se propuso que en los cargos en el que exista filtro de “confianza” se descarte la “provisionalidad y transitoriedad” del Sistema de Alta Dirección Pública, ya que desincentivan otras potenciales postulaciones, pues se considera que la persona que está en el cargo transitoriamente ya cuenta con la confianza de su superior.

Se estima que en Chile existiría muy poca regulación de la “puerta giratoria” del sector público al privado y viceversa, solamente es aplicable para fiscalizadores (no pueden trabajar por un plazo de seis meses en las entidades fiscalizadas), pero en la práctica, no se ha visto su aplicación. En la experiencia comparada las restricciones al post empleo tienen como

9 | En un modelo similar al de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

objetivo evitar los conflictos de intereses, influencia indebida y el uso de información privilegiada y reservada. En la Mesa Mixta se propuso buscar mecanismos contra estas prácticas, por ejemplo, un registro post-trabajo público administrado por Contraloría¹⁰ donde se entregue un formulario especial junto con la última declaración patrimonial y de intereses para que permita conocer las nuevas funciones de los ex funcionarios públicos; posteriormente dicha ficha se verificaría con la declaración de impuestos, imponiendo algún tipo de sanción para la infracción de su veracidad, por ejemplo, la inhabilitación temporal para detentar cargos públicos para el infractor e inhabilitación temporal para participar en licitaciones públicas para la empresa privada involucrada. Por el lado del nuevo funcionario público proveniente del sector privado, se propone realizar un cruce de su declaración patrimonial y de intereses (incluyendo empleos previos) para transparentar los conflictos de interés reales, aparentes o potenciales. Se concluyó que este tipo de herramientas y procesos encaminados a transparentar y manejar los conflictos de intereses son necesarios para prevenir la corrupción y mejorar la confianza pública en el servicio civil.

Para desarrollar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el servicio civil, se propuso incorporar indicadores/ criterios de transparencia y rendición de cuentas para las personas elegidas por el Sistema de Alta Dirección Pública, incluyéndolos en los contratos o en los convenios de desempeño.

En referencia al financiamiento político, se concluyó que la legislación sería débil y poco transparente. Por otro lado, se expresó que la fiscalización a los partidos políticos es inexistente y que, por tanto, es necesario mejorar la regulación y fiscalización del financiamiento de actividades electorales para evitar desvío de fondos públicos y que no se sobrepase el límite de gasto electoral como se ha comprobado en algunos estudios realizados en el país. Es así que es necesario implementar mayor grado de transparencia en el proceso de financiamiento de la política, particularmente en los procesos electorales. También se propuso establecer que el financiamiento sea transparente y solamente sea público y de personas naturales, y que estas donaciones tengan un valor máximo para evitar el tráfico de favores.

Se consideró que sería necesario perfeccionar aún más la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral para que se convierta en un organismo fiscalizador autónomo, activo y robusto que, además, cuente con recursos para modernizar su tecnología, realizar fiscalizaciones exhaustivas y aplicar las sanciones pertinentes.

Respecto a los conflictos de intereses, se debería establecer una definición clara respecto a lo que son e implican por medio de un manual y capacitaciones. Se propone mejorar las prácticas de transparencia respecto a las declaraciones de patrimonio e intereses, perfeccionando la información que se debe incluir en los formularios y aumentando las sanciones a las faltas de esta normativa, además de publicar el registro de los funcionarios que no cumplan con esta obligación. La sociedad civil reconoció que las declaraciones patrimoniales y de intereses son una buena herramienta, pero que éstas deben publicarse en formatos procesables para que puedan ser fiscalizadas, permitiendo así ejercer control social. Además, ello facilitaría la verificación de su contenido al cruzar las distintas bases de datos y, así posibilitaría contar con una herramienta automática de alerta temprana. Por otro lado, en la Mesa Mixta se expresó que se debe exigir la declaración antes de que la persona pueda ejercer sus funciones, y por el otro lado, no recibir su última remuneración si no presenta la declaración de salida.

¹⁰ Ya que la Contraloría General de la República tendría a su cargo la verificación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de acuerdo al proyecto de Ley de Probidad, sería lógico que también llevara un registro del post empleo de los funcionarios públicos.

La sociedad civil consideró que la regulación sobre los parlamentarios adolece de fallas, puesto que se autorregulan mermando la legislación aplicable a sí mismos, lo que ya es una clase de conflicto de interés. Por ejemplo, las sanciones relacionadas con las declaraciones patrimoniales y de intereses o con la Ley de Transparencia en relación a la transparencia pasiva serían menores o inaplicables a ellos.

Finalmente, se destacó la implementación de las listas de personas expuestas políticamente (PEP) que se implementó en Chile. Éste ha sido un esfuerzo de la Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los bancos y otras instituciones que han tenido que incorporar su uso, constituyendo un avance para seguir implementando las políticas de conocimiento de sus clientes, que en la experiencia comparada ha mostrado ser una política de prevención de la corrupción muy importante.

Artículo 8 de la UNCAC

En este artículo se promueve la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre funcionarios públicos por medio de códigos y normas. También establece la implementación de medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones y que se adopten medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda las reglas establecidas.

En la Mesa Mixta se coincidió en que si bien existen políticas y normativas que promueven la integridad, honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, muchas veces éstas carecen de suficiente claridad, pertinencia y concordancia, lo cual dificulta su entendimiento y aplicación práctica. Se consideró que falta claridad sobre los procedimientos específicos que deben seguir los funcionarios públicos en situaciones reguladas por la Ley de Probidad y otras afines; por ejemplo, la forma de transparentar los conflictos de intereses o realizar una denuncia. Una de las propuestas es incorporar las diversas regulaciones de la probidad en un Código de Conducta para funcionarios públicos de forma didáctica para promover la prevención de la corrupción, acompañado con ejemplos de buenas y malas prácticas, posiblemente en forma electrónica para que estuviesen en una base de datos de consulta. En este mismo sentido, se requiere promover procesos de inducción y capacitación de funcionarios públicos para enfrentar situaciones que atenten en contra de la transparencia y probidad, realizando una prueba anual de conocimientos.

Aunque en Chile hay una Ley de Protección al Denunciante, ésta presentaría limitantes y sería deficiente tanto en la promoción de la denuncia como en la misma protección del denunciante. No se aplicaría a todos los funcionarios públicos y no cumpliría con los estándares internacionales de una ley de protección al denunciante. Igualmente, se detectaron diferencias en el sistema, ya que en el caso de las municipalidades tiene que realizar la denuncia al alcalde, por lo que no hay suficientes garantías para el funcionario público que formula la denuncia. También se discutió la opción del anonimato de las denuncias, habiendo comentarios en pro y en contra a este sistema, sin llegarse a un acuerdo. Hubo consenso en que debiese existir mayor protección para el denunciante antes de que el caso llegue a ser una denuncia penal, en la que el denunciante puede solicitar la reserva de la identidad. Por otro lado, también se debería garantizar la protección del denunciante privado.

Hubo acuerdo en la necesidad de terminar con la disparidad en la protección de los funcionarios que realizan denuncias, ya que no incluye a todos los empleados del sector público, pues sólo es aplicable a funcionarios de planta. Igualmente,

se piensa que al finalizar la investigación, el denunciante debería ser informado sobre la conclusión de la investigación aunque no haya resultado en un sumario, para que exista confianza en que las denuncias se investigan. Sin los cambios indicados, se considera que no se promueve la denuncia ni se protege al denunciante.

En la Mesa del Sector Privado y entre las organizaciones de la sociedad civil, se propuso diseñar e implementar una campaña cultural para promover la participación ciudadana y el control social y, al mismo tiempo, continuar con el ejercicio de premiar las mejores prácticas (las que realmente se aplican y no son sólo texto) tanto a nivel general del sector público como de los funcionarios, que lo integran con el objetivo de reconocer, difundir e incentivar estas prácticas.

En la Mesa Mixta se propuso mantener la coordinación de forma permanente entre todos los sectores para conocer las acciones pro transparencia o probidad que se están realizando, y al mismo tiempo, crear iniciativas conjuntas, ya que ejercicios como el que se está llevando a cabo en este proyecto, permitirán tener una visión y trabajo integral del tema. También se indicó que se debería fomentar la difusión de las acciones que se están realizando en estas áreas, ya que faltaría información para la ciudadanía; por tanto, se propone la creación de un sitio web que contenga esta información.

Por otro lado, la sociedad civil organizada hizo un llamado al Poder Legislativo para que este Poder del Estado se integre a la discusión de los proyectos con el objetivo de enriquecer el debate y desarrollar la participación ciudadana.

Artículo 9 de la UNCAC

Los Estados deben instaurar prácticas relativas a la gestión de la hacienda pública que sean apropiados y transparentes. Para esto, se hace necesario que los procedimientos de contratación pública tengan bases claras y bien reglamentadas. También se hace necesario aplicar normas similares en la firma de contratos y licitaciones, formulando previamente las condiciones de participación, los criterios de selección y adjudicación y las reglas de licitación. El artículo señala la necesidad de contar con un sistema interno de cuentas, y el funcionamiento efectivo de mecanismos de gestión, auditoría y de control. Consecuentemente, se establece la necesidad de adoptar medidas correctivas cuando no hay cumplimiento de estas disposiciones.

En el diagnóstico, la Mesa Mixta destacó el proceso de compras públicas en el país. Chile cuenta con una buena legislación al respecto, donde se transparentan las adquisiciones y licitaciones pudiendo, además, realizarse un seguimiento en línea. El Sistema de Compras Públicas es útil para prevenir la corrupción, además de permitir la investigación y control sobre las operaciones que ejecutan los funcionarios públicos.

Entre los aspectos negativos se indicó que el sistema sigue siendo vulnerable, y una de las principales preocupaciones es el factor humano. Para eso se están realizando capacitaciones a los funcionarios de administración y a los técnicos, sometiéndolos a un proceso de acreditación relativo al funcionamiento del sistema y conocimientos legales. Esta acreditación tiene una validez de dos años e incluye temas de probidad. Uno de los efectos que se busca es evitar que se diseñen bases a la medida de ciertos proveedores o que se repitan bases de licitaciones ejecutadas en procesos anteriores, de manera que las empresas compitan efectivamente por entregar la mejor oferta al Estado.

Desde el sector privado se hizo manifiesta la necesidad de entregar información apropiada sobre los criterios de las propuestas, y se señaló que cerca del 90% de las bases técnicas de las licitaciones son publicadas y que cuando no lo son,

es por petición expresa de la institución. Además, se destacó que en las licitaciones cuyo monto es superior a las 1.000 UTM se hace partícipe una comisión evaluadora integrada por funcionarios públicos y externos y se recalcó que cualquier persona puede obtener los datos agregados en la plataforma web Analiza.

Se subrayó que cuando se percibe que pudo haber una irregularidad en el Sistema de Compras Públicas, existe la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Contratación Pública. Además, existe una plataforma web donde los reclamos son remitidos directamente ante el jefe de servicio y los de mayor gravedad son enviados a las Contralorías Regionales y procesados por ellas.

En el debate, se expresó que una de las prácticas que pudiera fortalecer al sistema es que los evaluadores suscriban no sólo cláusulas de confidencialidad, sino también una declaración de intereses verificable para poder prevenir actos de corrupción.

En este campo, en el cual hay muchos datos disponibles públicamente, es necesario incentivar el control ciudadano para que pueda realizar fiscalizaciones a bases, actas de adjudicación y otras piezas del proceso de licitación.

Artículo 10 de la UNCAC

Se dispone que los Estados Parte adopten medidas para aumentar la transparencia en la administración pública. Para llevar a cabo esta misión, los objetivos que se deben cumplir tienen relación con informar públicamente sobre la organización, funcionamiento y los procesos de toma de decisiones en el aparato público; e informar adecuadamente a la población sobre las decisiones y actos jurídicos respetando el derecho a la privacidad de los involucrados. Los Estados deben facilitar el acceso público a la información, buscando mecanismos para simplificar los contenidos entregados.

En la Mesa Mixta hubo consenso en que Chile cuenta con disposiciones y medidas que contribuyen a la transparencia en la Administración Pública. Bajo el modelo chileno, el acceso a la información pública es un derecho consagrado en el artículo 8° de la Constitución y por la Ley N° 20.285. La institucionalidad chilena cuenta con un órgano garante, el Consejo para la Transparencia, que determina si la información debe entregarse en caso de reclamo y que, además, sanciona a quienes sean reacios a entregar la información clasificada como pública. Sin embargo, se critica que esta garantía solamente aplique al Poder Ejecutivo y no al Legislativo y Judicial que cuentan con sus propias instancias de reclamo.

Uno de los problemas que se expresaron fueron las disimilitudes en el cumplimiento de las normas entre los distintos organismos. El gobierno central tiene un cumplimiento que bordea el 96%, mientras que, en promedio, las municipalidades cumplen menos del 30%. Dentro del ámbito municipal hay mucha asimetría, puesto que mientras algunas cumplen altos estándares, hay otras que no cuentan siquiera con sitio web. Con el objetivo de resolver estas asimetrías, ya se está trabajando con 50 municipalidades en modelos de gestión donde se generen herramientas y potencien las capacidades para mejorar los niveles de cumplimiento.

Además, para suplir las brechas entre las diferentes instituciones, se está trabajando en el Portal de Transparencia del Estado de Chile. La propuesta es crear un canal eficiente y de fácil acceso que contenga toda la información de las instituciones del Estado.

Otro de los problemas detectados dice relación con la gestión y custodia de archivos públicos, por lo que hay una clara necesidad de establecer una política pública relativa a esta materia. Una de las propuestas de la Mesa Mixta es que no exista la causal de denegación del acceso por falta de archivo o de incorporación a las bases de datos; de esta manera, mientras no exista una ley, las instituciones deberán observar la buena práctica de mantener estas herramientas que facilitan el acceso a la información.

En cuanto a la necesidad de incorporar nuevos estándares de transparencia, se promueve que las instituciones los integren como buenas prácticas. Del mismo modo, se propone que los servicios públicos añadan en sus buenas prácticas la publicación activa de la información más solicitada, facilitando así el acceso a las demandas de la ciudadanía y optimizando los recursos internos.

Una diferencia surgida en la Mesa Mixta dice relación con las disímiles interpretaciones acerca de qué se entiende por “información pública”. La sociedad civil organizada sostuvo que este derecho se debe consagrar constitucionalmente, evitando que sea sometido a interpretaciones judiciales; mientras que desde el ejecutivo, se señaló la necesidad de compatibilizar el derecho de acceso a la información con el derecho a la privacidad, siendo suficiente con el marco jurídico existente.

Artículo 11 de la UNCAC

Este artículo vela porque cada Estado Parte adopte medidas que fortalezcan la integridad y prevengan la corrupción en el Poder Judicial, así como en el Ministerio Público en caso que cuente con independencia análoga a la de ese Poder. Las propuestas de este artículo comprenden normas reguladoras de los nombramientos y de la conducta de los funcionarios y miembros, así como mecanismos de rendición de cuentas. También se propone fijar restricciones funcionales en caso de existir inmunidad de los miembros del Poder Judicial, de modo que ella no tenga duración indefinida.

En el diagnóstico se valoró la política de transparencia activa desarrollada por el Poder Judicial. Se destacó que éste, siendo un Poder del Estado y, por ende, constitucionalmente autónomo, se integró al Sistema de Compras Públicas, dando un paso hacia la transparencia y velando por evitar la corrupción.

En el tema de acceso a la información pública, se estableció un Comité de Transparencia que facilita el acceso y procesa la información que se puede entregar, y hasta el momento, ha cumplido con su misión. En el diagnóstico se señaló la necesidad de mejorar ciertos estándares de entrega de información, ya que la ciudadanía no accede con facilidad a ella.

Otro punto de preocupación fue el conflicto entre el derecho a la transparencia total y el respeto a la privacidad, ya que tratándose de juicios, hay mucha información privada involucrada y, hasta el momento, no hay sistemas que puedan tachar esta información de forma automática, siendo un punto en el cual se está trabajando en el Poder Judicial, para así equilibrar el derecho a tener toda la información y, al mismo tiempo, no afectar la privacidad de las personas. En la práctica, aunque se busca que los plazos de entrega de información se acorten, está el obstáculo tecnológico que hace que la entrega de información sea un trabajo en el que falta avanzar.

También se señaló la importancia de realizar cambios en la legislación, ya que hay documentos que obligatoriamente deben presentarse en papel y no se permite su ingreso mediante sistemas digitales, siendo un punto de retraso en el sistema.

Se señaló que también se han implementado mejoras significativas en las tecnologías de la información y de acceso, fortaleciendo también las interconexiones y el intercambio de información con policías y fiscalías, permitiendo mejorar el trabajo en conjunto.

En referencia a los conflictos de intereses, existen ciertos cargos que se están incorporando al reglamento de declaraciones patrimoniales y que sí son verificadas de manera detallada, de modo que la información sea verídica y esté actualizada.

Respecto a las nominaciones en el Poder Judicial, existe un esquema bastante estricto. Ante cualquier duda en los procedimientos, la Contraloría interna dictamina la realización de un sumario nombrando un fiscal y un actuario que guían la investigación. Las sanciones están establecidas en un reglamento, y ante la eventual existencia de un delito, el caso es derivado a la fiscalía.

En la batalla contra la corrupción, el Poder Judicial realiza auditorías externas a sus estados financieros, a lo que se suma la implementación de inventarios físicos para comparar con los inventarios teóricos.

Artículo 12 de la UNCAC

En la búsqueda de la prevención de la corrupción en el sector privado, la UNCAC promueve que los Estados Parte sean actores protagónicos en esta tarea mediante la adopción de medidas que mejoren las normas contables y de auditoría en el sector privado. Además, deben prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces en los casos que así lo requieran. Los Estados Parte deben ser promotores de la formulación de normas y procedimientos tendientes a evitar la corrupción, como los códigos de conducta o guías de buenas prácticas comerciales. Del mismo modo, se deben promover pautas tendientes a evitar los conflictos de intereses, detectarlos cuando surjan y discriminar entre los procedimientos admisibles e inadmisibles en estos casos.

En la Mesa Mixta de los sectores público y privado se consensuó en la necesidad de instalar prácticas de transparencia e integridad en el sector privado. Se señaló que las prácticas de autorregulación, como los códigos de ética y los sistemas de cumplimiento, no siempre son suficientes para evitar la corrupción y, por lo tanto, se requiere el apoyo y guía del Estado y de sus actores reguladores para cumplir efectivamente y promover buenas prácticas. Se propuso, por ejemplo, que en los indicadores de las bases de licitación se añadan algunos referentes a la integridad, de forma que si una empresa tiene un sistema de cumplimiento funcionando adecuadamente, en la práctica tenga mayor puntaje que aquellas que no lo tienen.

Además, se constató el distinto nivel de logro respecto a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ya que tiene algunos requerimientos que son más fáciles de cumplir para las empresas de mayor tamaño. En consecuencia, se deben tomar medidas tendientes a la implementación de sistemas de cumplimiento en empresas más pequeñas, por lo que se propone buscar fondos nacionales o internacionales para poder instalar estas prácticas de integridad en las Pymes.

En la Mesa Pública y Privada se concuerda en que la Ley N° 20.393 (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) es un avance, pero que se debe aumentar el catálogo de delitos incluidos y ver su funcionamiento en la práctica. Además, se señaló que la Superintendencia de Valores y Seguros no cuenta con atribuciones para fiscalizar los modelos de prevención ni a las empresas certificadoras, sino que sólo tiene a su cargo el registro de estas últimas, por lo que existe un vacío de las atribuciones de fiscalización.

En las Mesas hubo consenso en que la implementación de estos modelos no tiene porqué ser incompatible con los derechos de los trabajadores, habiendo ejemplos internacionales en esta materia.

Artículo 13 de la UNCAC

Para lograr un combate efectivo contra la corrupción, la UNCAC señala como una necesidad la participación activa de la ciudadanía, por lo que se requiere de medidas adecuadas que fomenten el involucramiento de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y de organizaciones sociales de base. El artículo 13 vela porque los Estados aumenten los niveles de transparencia existentes en el aparato público; promuevan la participación real de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y se garantice efectivamente el acceso público a la información. Los Estados deben promover y ser garantes del derecho ciudadano a buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Además, se busca que los Estados cumplan con la realización de actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como la inclusión de estos principios en programas de educación pública escolar y universitaria.

En la Mesa de Trabajo Mixta se destacó el avance que significa la Alianza para el Gobierno Abierto, ya que en el marco del plan de trabajo establecido por el Ejecutivo se han realizado exitosamente mesas de trabajo con la participación de las organizaciones sociales.

También en el ámbito de la participación ciudadana, se señaló la importancia de implementar efectivamente la Ley de Participación y que existan mecanismos claros para el involucramiento de la ciudadanía en debates relativos a políticas públicas.

Nuevamente, uno de los puntos más destacados fueron los avances significativos impulsados por la Ley de Transparencia y la creación del Consejo para la Transparencia, así como las actividades que éste ha realizado en pos del acceso a la información y de prácticas gubernamentales más transparentes.

Respecto a la protección al denunciante, se precisó que en el Portal “Contraloría y Ciudadano” se solicita que los denunciantes se individualicen, sin perjuicio de la reserva y protección de la identidad. En cuanto a las sugerencias de fiscalización que se pueden realizar en el sitio, esas sí pueden ser efectuadas anónimamente.

También se acordó trabajar en una campaña de información dirigida a niños y, al mismo tiempo fomentar la integración de buenas prácticas ciudadanas en los programas educativos; considerando que las experiencias de involucramiento de la ciudadanía en temas de participación y control ciudadano son relativamente recientes, se estimó pertinente reforzarlas por esta vía. Finalmente y como parte del proyecto se propone la realización de una campaña formativa a largo plazo.

Artículo 14 de la UNCAC

El artículo 14 de la UNCAC se aboca a la prevención del lavado de dinero, estableciendo medidas que tiendan a evitar estas actividades. También se busca contar con la colaboración de entidades financieras y relacionadas para impedir que fondos provenientes de la corrupción sean introducidos en el sistema financiero. Este artículo pretende la implementación de medidas de reglamentación y transparencia en el sistema bancario, así como también la cooperación de las instituciones públicas y los Estados en casos relativos al lavado de dinero.

En la Mesa Mixta se destacó la regulación que existe en el país para prevenir e investigar los delitos de lavado de dinero.

Se percibe que falta información respecto al lavado de dinero, ya que Chile no está inmune a este delito. Por ejemplo, en el sector privado existe la percepción que no pueden ser víctimas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, lo que ha retardado la implementación de los sistemas de prevención o de cumplimiento propuestos por la Ley N° 20.393.

Por otro lado, se destaca la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a través de una política de puertas abiertas y difusión continua. También se hizo mención al proyecto implementado por la UAF con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que tuvo por objetivo capacitar a los sujetos obligados o regulados.

En cuanto a las Personas Expuestas Políticamente, se destacó que se estableciera un registro con los cargos mínimos que debiesen estar sometidos a ese régimen.

En la Mesa Mixta surgió un punto de discrepancia entre el sector privado y la sociedad civil organizada acerca del levantamiento del secreto bancario, pues en el proyecto de ley actualmente en tramitación se le otorgan mayores atribuciones a la UAF para solicitar información a los bancos. Existe el desafío de seguir avanzando en la prevención del lavado de activos, asegurando que siga funcionando el sistema persecutorio y judicial ya que, de acuerdo a las estadísticas, en Chile ha habido un aumento persistente de condenas y montos de comisos, por lo que se deben fortalecer las herramientas preventivas, continuar la coordinación entre el sector público y privado, perfeccionar el análisis de inteligencia para proporcionar información de calidad a la Fiscalía y realizar cambios normativos y legales para fortalecer a la UAF.

Conclusiones Capítulo II

A partir de 2009, con la publicación de parte de las leyes que componían la denominada Agenda de Probidad, se han perfeccionado instituciones y procesos al interior de la Administración favoreciendo la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción en Chile. No obstante lo anterior, se estima que es necesario fortalecer aquellas áreas que requieren nuevos marcos regulatorios, algunas de las cuales están consideradas en diversos proyectos de ley que hoy se tramitan en el Congreso. Entre estos proyectos se pueden mencionar los referidos al lobby y registro público de acuerdo a estándares internacionales; regulación y transparencia de partidos políticos y financiamiento de campañas políticas; regulación de conflictos de interés y de conflictos pre y post empleo público o privado; fortalecimiento del servicio civil y fiscalización y verificación de declaraciones patrimoniales y de intereses, entre otras materias que se analizaron en las mesas de trabajo de este proyecto.

En este mismo sentido, se estima que es necesario realizar un análisis de la aplicación de la legislación vigente y una sistematización de los proyectos de ley comparados con leyes modelo internacionales, para ser presentada en las respectivas comisiones en las que se encuentren los proyectos para promover su fortalecimiento.

Como se ha expresado en este Informe, varios de los aspectos que se deben reforzar para avanzar en el cumplimiento de la UNCAC son posibles de implementar a través del desarrollo de buenas prácticas en el sector público, privado y en las organizaciones sin fines de lucro, algunas de las cuales fueron identificadas dentro del proyecto y publicadas en el sitio web. Así y a modo de ejemplo, una buena práctica refiere a la implementación de sistemas de integridad al interior de las organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil, que incluyan campañas de difusión y estrategias de capacitación para promover la cultura ética entre los integrantes de estas entidades. Estos sistemas deben contar con mecanismos de denuncia asociados a la respectiva protección del denunciante.

Una lección central de todo el proceso llevado adelante consiste en que es necesario seguir implementando políticas públicas de fomento a la participación y control ciudadano en temas anticorrupción, así como educación cívica desde la edad escolar y campañas de difusión al respecto.

Finalmente y en el plano más organizativo, consideramos que es prioritario que la red público-privada formada para la ejecución de este proyecto pueda continuar operando y permitiendo a sus integrantes seguir interactuando, lo cual supone la identificación de alguna entidad que la coordine o lidere.

CAPÍTULO V

Introducción al Capítulo V

El Banco Mundial ha calculado que los costos de la corrupción equivalen a un cinco por ciento del Producto Interno Bruto Mundial anual; de consiguiente, se debe luchar contra este fenómeno de manera global y coordinada. No obstante, la tarea no es sencilla: los activos producto de la corrupción son transferidos de un país a otro, perdiéndose entre organizaciones “presta nombres” y empresas “fantasmas” cientos de transferencias y operaciones financieras con fachada legal, lo que impide su rastreo. Por esta razón, es de vital importancia la cooperación internacional entre los países, ya sea para solicitar información, realizar diligencias que apoyen las investigaciones y buscar y recuperar activos, entre otras acciones, en la perspectiva de obtener sentencias condenatorias en contra de los autores de esta clase de ilícitos y el decomiso de los bienes originados en ellos.

La Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas enfatiza la importancia de la recuperación y restitución de activos del país víctima, por cuanto se trata de un disuasivo potente al eliminar el principal incentivo de la corrupción, desposeer a los autores de sus activos e instrumentos para cometer actos dolosos y promover el objetivo de administrar justicia y reparar, al mismo tiempo, el daño causado a víctimas y poblaciones, contribuyendo al desarrollo de los países.

El Capítulo V de la UNCAC provee, por primera vez, un marco más integral e innovador en relación a la recuperación y restitución de activos; no obstante, aún es necesario avanzar más en su implementación y que los Estados Parte desarrollen e integren procesos en los que realmente exista amplia cooperación y asistencia internacional. Un estudio publicado por la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR por sus siglas en inglés)¹¹, en que se revisó el cumplimiento de los compromisos adoptados en 2008 sobre Efectividad de la Ayuda al Desarrollo¹², demostró que solamente cuatro países (Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos) pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) habían repatriado US\$222 millones a países extranjeros víctimas de la corrupción entre 2006 y 2009. Por su parte, Francia y Luxemburgo habían congelado US\$1.200 millones. El mismo informe destacó la necesidad de desarrollar un plan de seguimiento para que los países adopten medidas concretas respecto de la recuperación de activos, ya que el 80 por ciento de los países donantes no habían avanzado en la materia (OECD-StAR, 2011). Por otro lado, la recuperación de activos no es sólo tarea del sector público, sino que resulta necesaria la asistencia de las instituciones financieras para que verifiquen la identidad de sus clientes, beneficiarios finales y reporten las operaciones sospechosas al organismo respectivo.

Entre los obstáculos que se han encontrado para la recuperación de activos están el anonimato de las transacciones, la falta de pericia técnica y de recursos, la falta de armonización de normas y procedimientos, la baja cooperación y la imposición de que exista condena previa de los delincuentes como requisito para la recuperación¹³.

11 | El Banco Mundial y la UNODC lanzaron en 2007 un programa denominado “Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR por sus siglas en inglés) que fue clave para promover la ratificación e implantación del Capítulo V de la UNCAC. Actualmente, StAR sirve de apoyo para los países víctimas de la corrupción en relación a la recuperación de activos.

12 | En esa ocasión se aprobó una agenda de acción en la que se dispuso el compromiso de los países para combatir la corrupción y para el rastreo y recuperación de los bienes robados. El informe se preparó para el IV Foro de Alto Nivel sobre la efectividad de la Ayuda que se celebró en Busan, Corea del Sur, en noviembre de 2011.

13 | The World Bank y UNODC, 2009.

Para contar con un proceso de recuperación de activos eficaz, se requiere liderazgo, colaboración de todas las entidades involucradas y líneas claras de responsabilidad por los resultados. Algunos países han resuelto estos problemas estableciendo equipos interinstitucionales caso a caso o como estructuras permanentes dedicadas a las actividades de recuperación de activos¹⁴.

Por otro lado, la resolución 4/4 de la Declaración de Marrakech, titulada “Cooperación Internacional en Materia de Recuperación de Activos”, insta a los Estados Parte a que designen a una autoridad central para que lidere los procesos respectivos por una parte y, por otra, que se dé un enfoque dinámico a la cooperación internacional para la recuperación de activos, utilizando los mecanismos previstos en el Capítulo V de la UNCAC. Además, existe un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre recuperación de activos que está analizando las trabas existentes y que busca establecer una red mundial de coordinadores de recuperación de activos.

Rol de las instituciones públicas en Chile en materia de recuperación de activos

Consejo de Defensa del Estado (CDE)

El CDE es un servicio público descentralizado, bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República. El CDE defiende y representa judicialmente al Estado, ejerce acciones civiles penales respecto de hechos y actos que pudieran perjudicar económicamente al Fisco. Durante las mesas de trabajo se propuso que el CDE asumiera el rol de representar al Estado para ejecutar la sentencia en su contenido patrimonial sobre los inmuebles decomisados. Es decir, que represente al Estado ante el Poder Judicial para que los bienes inmuebles sean registrados a nombre del Fisco para su posterior ejecución en subastas públicas por parte de la Dirección General de Crédito Prendario.

Contraloría General de la República (CGR)

Es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado con autonomía constitucional. Es esencialmente una entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, fiscaliza el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros servicios que determinen las leyes, verifica el examen y juzgamiento de cuentas y le corresponde llevar la Contabilidad General de la Nación. Sus competencias en este caso son indirectas a través del Juicio de Cuentas o de las denuncias a la justicia ordinaria, ya que si existen antecedentes que lo ameriten se derivan a la justicia penal. No tiene un rol internacional en esta materia.

Dirección General de Crédito Prendario (DICREP)

Es un órgano auxiliar de la Justicia, que entre sus funciones, cuenta con las potestades de custodia, subasta o destrucción de las especies decomisadas por los tribunales.

14 | Idem nota anterior.

Poder Judicial

Los Tribunales de Garantía tienen competencia en algunas de las materias relacionadas con este Capítulo V, tales como dictar medidas cautelares, aprobar previamente las actuaciones de los fiscales y decidir sobre el destino de las especies decomisadas. Por su parte, a los Tribunales Orales en lo Penal corresponde dictar sentencias y decretar el comiso de las especies embargadas.

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

La UAF es un organismo descentralizado, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

Tiene como misión prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). La UAF ejerce su rol preventivo a través de la emisión de instrucciones, la difusión de señales de alerta, la capacitación de sujetos obligados a informar al servicio la detección de operaciones sospechosas de LA o FT, el control del cumplimiento de la normativa que emite, y el uso de la inteligencia financiera. En caso que existan indicios de LA o FT, remite los antecedentes al Ministerio Público. Cuenta con la atribución de solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva.

Ministerio Público (MP)

Es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Las especies incautadas o decomisadas durante la investigación son conservadas bajo la custodia del MP, quien debe adoptar las medidas necesarias para evitar que se alteren de cualquier forma. En las investigaciones por delitos de droga y lavado de activos, si la incautación recae sobre establecimientos industriales o mercantiles, sementeras, plantíos o en general frutos pendientes, el juez de garantía, a solicitud del MP, designará un administrador provisional, quien deberá rendir cuenta de su gestión a este último. El MP es también la autoridad competente para recibir las solicitudes de asistencia internacional, para posteriormente solicitar la intervención del juez de garantía del lugar en que deban practicar las diligencias solicitadas si ellas afectan los derechos constitucionales del imputado.

Capítulo V de la UNCAC

Este capítulo, que trata sobre recuperación y restitución de bienes decomisados por delitos de corrupción, está relacionado con el Capítulo II (Prevención) y el Capítulo IV (Cooperación Internacional) del mismo instrumento. El Capítulo V profundiza estas disposiciones, añadiendo medidas más concretas sobre la recuperación de los activos resultantes de actos de corrupción y recalca la importancia de la asistencia del sector privado y las instituciones financieras en esta área.

En él se establecen los procedimientos y condiciones que deben existir en los Estados Parte para la recuperación de activos, incluida la facilitación de acciones civiles y administrativas; el reconocimiento de las órdenes de comiso extranjeras y la adopción de medidas que se realicen basadas en éstas; la restitución de bienes a los Estados requirentes, la restitución de los bienes a sus propietarios legítimos y la indemnización a las víctimas.

Es importante recalcar que la UNCAC modifica el principio que establecía que la propiedad del producto del delito correspondía al Estado que lo hubiera decomisado, ya que se promueve la restitución de los bienes, pero también contempla que se comparta la restitución con el Estado que cooperó en el comiso. Las disposiciones de este Capítulo requieren, muchas veces, la dictación de nueva legislación y de una adecuada estructura institucional para llevar a cabo el comiso, la administración de esos bienes y su posterior restitución.

A continuación se revisan los artículos del Capítulo en comentario y los principios obligatorios y facultativos que deben implementar los Estados Parte, así como el diagnóstico y propuestas realizadas por el grupo de trabajo.

Artículo 51 de la UNCAC

El artículo 51 de la UNCAC expresa que la restitución de activos es un principio fundamental y que los Estados Parte deben ampliar su cooperación y asistencia entre sí, puesto que las prácticas cleptocráticas afectan todas las políticas públicas, incluidas las relativas a la paz y la seguridad, el crecimiento económico, la educación, la atención de salud y el medio ambiente. Este artículo declara que la restitución de activos es una regla primordial de la Convención, por lo tanto, cualquier duda de interpretación sobre la restitución de activos deberá resolverse a favor de la restitución.

Respecto a este artículo, Chile ha tenido una buena disposición para cooperar internacionalmente con otros países. En la práctica, se ha colaborado principalmente en casos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa, no existiendo experiencias en materia de corrupción. Sin embargo, del análisis del Capítulo, la Mesa concluyó que se observan algunos vacíos legales, sobre todo en cuanto a las posibilidades de restitución de activos al país víctima de actos de corrupción, como se analizará en los siguientes apartados.

Artículo 52 de la UNCAC

Este artículo se refiere a la prevención y detección de transferencias del producto del delito y está ligado al artículo 14 de la UNCAC. Entre las políticas y prácticas de prevención de la corrupción que deben existir en los países miembros se encuentra el que deben exigir a las instituciones financieras que verifiquen la identidad de los clientes; que se adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en

cuentas de valor elevado; crear listas de personas que desempeñen funciones públicas prominentes (PEPs locales o extranjeros) y de sus familiares y estrechos colaboradores; impartir directrices relacionadas con este tema para identificar transacciones sospechosas; impedir establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación; compartir información y transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos, entre otras propuestas.

Respecto de este artículo, Chile ha adoptado las medidas necesarias para cumplirlo en relación a la prevención de la corrupción y se realizan casi todas las verificaciones señaladas. La UAF coordina el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con la participación de una amplia gama de instituciones públicas y privadas: Banco Central; los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores; el Servicio de Impuestos Internos; las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego y de Pensiones; el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA, y los 34 sectores económicos, compuestos por empresas y personas naturales obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero. El Ministerio Público, por su parte, es la institución que ejerce las facultades persecutorias, y el Poder Judicial es el que aplica las sancionatorias correspondientes.

La UAF cuenta con un Registro que incorpora a más de 4.116 personas naturales y jurídicas que tienen la obligación legal de implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; igualmente, deben informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas que se detecten en el ejercicio de sus actividades. A través de los reportes de operaciones sospechosas recibidos, la UAF aplica el análisis de inteligencia financiera y si hay indicios de delito, se remiten los antecedentes al Ministerio Público. En 2011, la UAF envió 150 Reportes de Operaciones Sospechosas a la Fiscalía.

El grupo de trabajo consideró que la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas suple ciertas falencias con relación al cohecho y lavado de dinero. Es una ley relativamente nueva, publicada en diciembre 2009, no obstante, ya se han formalizado a dos empresas y tres universidades por soborno. Además, se llegó a un acuerdo reparatorio con una empresa por US\$2 millones.

El 3 de diciembre de 2012 la UAF publicó la Circular 49, que establece las obligaciones de los sujetos pasivos (reporte de operaciones sospechosas, reporte de operaciones en efectivo, creación y mantención de registros, debida diligencia y conocimiento del cliente) y hace referencia a las normativas para combatir los actos de corrupción entre altos funcionarios públicos chilenos y extranjeros, definidos éstos como “chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. El registro de operaciones y de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) por los sujetos obligados, tiene como objetivo prevenir y detectar actos de lavado de activos provenientes de eventuales conductas de corrupción. Las entidades supervisadas por la UAF deben implementar y ejecutar el “due diligence” o debida diligencia y conocimiento de los clientes, estableciendo sistemas apropiados de manejo del riesgo para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final, es o no un PEP; obtener y exigir, si corresponde, aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con un PEP o que ha pasado a tener esta calidad cuando la relación comercial es previa a dicha condición; tomar medidas razonables para definir la fuente de la riqueza, la fuente de los fondos de los clientes y beneficiarios reales identificados como PEP y el motivo de la operación; implementar procedimientos y medidas de debida diligencia continua sobre la relación comercial establecida con un PEP; y registrar e informar cualquier operación sospechosa de algún PEP.

Si bien la Mesa de Trabajo convino en que Chile cuenta con sistemas apropiados de información financiera de los funcionarios públicos de acuerdo a los artículos 57 y siguientes de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, basados en una declaración de intereses y patrimonio (Art. 60 A), las sanciones establecidas en la ley son bajas y la veracidad de esas declaraciones no siempre es fiscalizada. En cuanto a su publicación, por buenas prácticas, varias de las declaraciones se encuentran en los sitios Web de los servicios y están accesibles a toda la ciudadanía.

La CGR recibe para su custodia y consulta 10.033 declaraciones patrimoniales y 8.845 declaraciones de intereses¹⁵. Respecto a estas declaraciones, como ya se propuso en el Informe del Capítulo II del Proyecto, se deben mejorar las prácticas de transparencia, perfeccionando la información que se debe incluir en los formularios y aumentando las multas a las faltas de esta normativa; debiese publicarse el registro de los funcionarios que no cumplan con esta obligación y establecerse un sistema de verificación y fiscalización de los datos. Con todo, la Mesa valoró el proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso Nacional que confiere a la CGR la fiscalización del contenido de las declaraciones en cuestión.

En relación a la cooperación internacional hubo consenso general en que se cumple esta exigencia en Chile, ya que a través de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público se procesan dichas peticiones de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20 bis del Código Procesal Penal. Se explicó que los tratados internacionales han ido incorporando la normativa indispensable que hace operativa la cooperación y que obliga a los Estados, por ejemplo, a dar acceso de antecedentes, pruebas y otras materias específicas del proceso. Sin embargo, en el caso de los países de América Latina existe una dificultad a nivel regional derivado de las cuestiones de jurisdicción o soberanía, mientras que en el caso de Europa la cooperación es más fluida, habiendo planificación y coordinación en las investigaciones y acciones de cooperación, por lo que todavía falta por avanzar en este terreno en nuestro continente. En términos de estadísticas, el Ministerio Público recibe aproximadamente cerca de 700 solicitudes penales internacionales al año. En solicitudes realizadas por Chile, el 23 por ciento es de delitos de corrupción (cohecho y malversación).

Por su parte, el Ministerio Público ha recibido solicitudes de asistencia de 28 países, entre ellos Perú, Argentina, EE.UU. y Rusia. Los procesos que se solicitan refieren a revisión de antecedentes penales; levantamiento de secreto bancario y otras diligencias tales como toma de declaraciones, notificación y remisión de otros antecedentes. La tecnología también ha facilitado la cooperación internacional, pues actualmente se realizan actuaciones a través de videoconferencias internacionales.

En este mismo punto, el Poder Judicial cuenta con una red por la cual se canalizan los requerimientos de cooperación internacional. También hacen uso de las videoconferencias en la justicia oral para realizar diligencias, por ejemplo, audiencias de testigos.

La Mesa de Trabajo concluyó que aunque se considera que el país cumple con este artículo, la existencia de una sola norma específica sobre tramitación de solicitudes de asistencia internacional (artículo 20 bis del Código Procesal Penal) y que otorga competencia al juez de garantía del lugar para que se practiquen las diligencias, de alguna manera limita la eficacia de la disposición, pues en los hechos se han debido enfrentar problemas de competencia y de plazos que abren

una ventana para que los bienes objeto de las actividades de corrupción cambien de propietario, evitando así la acción del comiso. Para este caso, el CDE expresó que una buena práctica podría ser que se enviaran las órdenes de detención y las solicitudes de incautación al mismo tiempo para evitar que los bienes pasen a propiedad de terceros.

Por lo anterior la Mesa de Trabajo sugirió perfeccionar la normativa que regule la cooperación internacional para que se otorgue más certeza al Estado Parte del tipo de actuaciones que se pueden llevar a cabo. Asimismo, propuso la creación de un manual de cooperación internacional que explique los procesos a realizarse, en español y en inglés. Además, se realizó una propuesta de reforma legislativa en el apartado correspondiente al artículo 53.

Artículo 53 de la UNCAC

Este artículo se refiere a las medidas para la recuperación directa de bienes, y expresa que los Estados Parte deben contar con procedimientos que permitan a otro Estado a participar en los tribunales locales como demandante para recuperar productos obtenidos mediante actos de corrupción (recuperación), en un proceso de decomiso, o como víctima para propósitos de restitución ordenada por el tribunal (indemnización).

En este aspecto se estima que se debe perfeccionar las normas en cuanto a procedimientos de devolución de activos. Al respecto, la Mesa sugirió una nueva redacción del Artículo 16 inciso 1° del Código Civil para adecuarlo a lo establecido en la UNCAC:

Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile; lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo que establezcan los tratados internacionales y de lo convenido en los contratos internacionales.

También se señaló que el artículo 20 bis del Código Procesal Penal debería ser modificado mientras no exista una ley o convenios sobre cooperación internacional. Por lo tanto, se propone que se modifique dicho artículo de la siguiente forma:

“Tramitación de solicitudes de asistencia internacional. Las solicitudes de autoridades competentes de país extranjero para que se practiquen diligencias en Chile serán remitidas directamente al Ministerio Público, el que solicitará la intervención del juez de garantía del lugar en que deban practicarse, cuando la naturaleza de las diligencias lo haga necesario de acuerdo con las disposiciones de la ley chilena. Las solicitudes de asistencia internacional que formule el Ministerio Público a autoridades extranjeras, serán remitidas directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin sujeción a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil”.

De esta manera, el artículo 20 bis del Código Procesal Penal tendría simetría con el artículo 47 de la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que establece que **el Ministerio Público, directamente y sin sujeción a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, podrá requerir y otorgar cooperación y asistencia internacional...**. Esta norma también pudiera resultar aplicable para los casos de lavado de dinero, en los cuales su delito base puede ser un acto de corrupción.

Finalmente, se propone la celebración de convenios cooperativos bilaterales o multilaterales en los que se describan los procesos que deben llevar a cabo los Estados Parte para realizar las acciones civiles enumeradas en el artículo 53 de la UNCAC, de forma de facilitar y agilizar los procedimientos.

Artículos 54, 55 y 56 de la UNCAC

En este apartado se analizarán estas normas conjuntamente, puesto que los temas que ellas regulan son semejantes, con algunas variantes:

El artículo 54 se refiere a los mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional, con el objetivo de que los Estados Parte cuenten con un sistema sólido de recuperación de bienes sin dificultades y puedan ofrecer cooperación, a través de sus distintos ordenamientos jurídicos, por medio del embargo preventivo o incautación o posterior comiso. También se establece que los Estados Parte deberán velar por que sus autoridades pueden dar efecto a toda orden de comiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte; que sus autoridades pueden ordenar el comiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que puedan tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados con arreglo a su derecho interno.

En el artículo 55 se prevén obligaciones para apoyar la cooperación internacional en relación al ordenamiento jurídico del Estado Parte, ya sea reconociendo y ejecutando una orden de comiso extranjera, o remitiendo a sus autoridades competentes la solicitud de una orden de comiso interna basada en información suministrada por otro Estado Parte.

El artículo 56 se refiere a la cooperación internacional sin la necesidad de petición de información de otro Estado Parte. Es así que se introduce el concepto de cooperación espontánea, promoviendo que los Estados informen de manera activa a otros Estados Parte cuando consideren que hay información que puede ayudar a poner en marcha o llevar a cabo investigaciones o actuaciones judiciales y la eventual recuperación de activos.

La legislación chilena contempla normativa para otorgar cooperación internacional, como se analizó anteriormente y, de igual manera, existen regulaciones para la realización del comiso. Por su parte, el artículo 157 del Código Procesal Penal establece las medidas cautelares reales aplicables en Chile, las cuales pueden implementarse desde la etapa de investigación requeridas por el Ministerio Público al juez de garantía, y ellas pueden ser secuestro del bien, nombramiento de interventor, retención de los bienes o prohibición de celebrar actos o contratos sobre el bien, entre otras. Pero debido a que el comiso tiene una naturaleza jurídica de pena, no es posible otorgar asistencia internacional en la etapa de investigación, pues para proceder se requiere de una sentencia condenatoria del país requirente. Por lo tanto, cuando existe sentencia del país extranjero, se puede ejecutar dicho fallo según lo previsto por el artículo 13 inciso final del Código Procesal Penal que establece que **“la ejecución de las sentencias penales extranjeras se sujetará a lo que dispusieren los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encontraren vigentes.”**

Por otro lado, la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, establece el comiso como una pena accesoria a la principal de privación de libertad. El artículo 47 facilita la cooperación internacional, disponiendo que **el Ministerio Público, directamente y sin sujeción a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 76 del Código de Procedimiento Civil** (proceso que se realiza por conducto de la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores), **podrá requerir y otorgar cooperación y asistencia internacional destinada al éxito de las investigaciones sobre los delitos materia de esta ley, de acuerdo con lo pactado en convenciones o tratados internacionales, pudiendo proporcionar antecedentes específicos, aun cuando ellos se encontraren en la situación prevista en el inciso tercero del artículo 182 del Código Procesal Penal** (secreto de actuaciones).

No obstante, se espera que Chile cumpla con el punto de cooperación internacional en relación al comiso en el mediano plazo, ya que hay un proyecto que modifica la Ley N°19.913¹⁶ y permite el comiso de bienes por un valor equivalente al monto relacionado con el delito investigado; y en el evento de que la sentencia sea condenatoria, el tribunal podrá decretar el comiso de otros bienes que hayan sido producto del delito.

En la Mesa de Trabajo se discutió la necesidad de contar con un mecanismo que administre de manera eficaz los bienes muebles decomisados para evitar su deterioro, como se hace en otros países que cuentan con organismos o fondos especializados en la administración de este tipo de bienes. También se discutió sobre la “enajenación temprana” para evitar el detrimento del activo, o bien, cuando se trata de bienes que no se pueden administrar por su naturaleza (animales, autos, predios agrícolas, etc.), se expresó que lo conveniente sería realizar la venta de los bienes, y que el mecanismo de administración maneje el dinero obtenido; y en el caso que la persona sea absuelta del delito, se le reintegre el valor del bien con reajustes e intereses. Esta propuesta se considera posible integrando en el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal la venta directa o subasta de estos bienes por ser susceptibles de próximo deterioro o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa, quedando, además, en concordancia con el artículo 40 inciso 4° de la Ley N° 20.000.

Igualmente, se sugirió que es necesario realizar avances en relación con la subasta pública de bienes inmuebles decomisados a favor del Fisco, que no han podido ser rematados y quedan en manos de terceros o familiares de los delincuentes. Al respecto, se realizó una sesión especial con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), el Ministerio Público y el Poder Judicial. En esta reunión se analizó la posibilidad de implementar un procedimiento en el cual el CDE solicite la inscripción de los bienes decomisados a nombre del Fisco para su posterior remate por la DICREP.

Respecto a la cooperación espontánea, se explicó que informalmente se ha cooperado con otros Estados, sin embargo, sería necesario establecer redes para que la información espontánea entre los Estados Parte fuera fluida y se conocieran las instancias a las que se debe contactar.

Artículo 57 de la UNCAC

Este artículo deja pocas facultades discrecionales a los Estados Parte, que deben contar con legislación que asegure que no haya obstáculos a la restitución de activos decomisados por casos de corrupción tratados en la UNCAC, cuando exista sentencia condenatoria firme (con excepción que no se pueda juzgar al delincuente por muerte, ausencia, fuga, entre otros) y el Estado Parte requirente acredite razonablemente su propiedad o daños causados. El Estado requerido puede deducir los gastos razonables en los que incurra. Este proceso de restitución deberá llevarse a cabo conforme a los principios fundamentales del derecho interno del Estado requerido, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe. El Estado requerido debe reconocer también a los propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito al restituir los activos.

La restitución al Estado requirente de los activos decomisados en casos de corrupción no está regulada en Chile. El artículo 469 del Código Procesal Penal establece que “los dineros y otros valores decomisados se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial” y “las demás especies decomisadas se pondrán a disposición de la Dirección General del Crédito Prendario para que proceda a su enajenación en subasta pública, o a destruirlas si carecieren de valor” destinando el valor de la enajenación a la Corporación mencionada. Igualmente, este ordenamiento establece el destino de otras especies retenidas y no decomisadas en el artículo 470, si no son reclamadas por su legítimo titular, las que se venderán en subasta pública y el dinero obtenido se destinará a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Por otro lado, la Ley N° 20.000 también establece el destino de los bienes decomisados, en su artículo 46, que dispone la enajenación en subasta pública por parte de la Dirección General del Crédito Prendario de los bienes decomisados, y el capital obtenido ingresará a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Similar destino se aplica a los bienes decomisados en materia de lavado de dinero, según la Ley N° 19.913.

Artículo 58 de la UNCAC

Este artículo establece la figura de dependencia de inteligencia financiera para que los Estados Parte puedan cooperar entre sí, es decir, que se encarguen de recibir, analizar y dar a conocer las transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Se debe proteger a las instituciones financieras para que divulguen dicha información de buena fe.

Chile cumple con este artículo plenamente, ya que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la institución pública encargada de prevenir en Chile el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Asimismo recibe reportes de operaciones sospechosas (ROS) de 4.116 personas jurídicas y naturales. Esta institución utiliza procesos de inteligencia financiera y cuenta con acuerdos de cooperación con otras instituciones para incrementar su acceso a fuentes de información. La UAF intercambia información con otras Unidades homólogas del extranjero. En 2011, la UAF envió a la Fiscalía Nacional 150 Reportes de Operaciones Sospechosas con indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El último párrafo del artículo 3° de Ley N°19.913 (Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos), establece que la información proporcionada de buena fe por las personas jurídicas y naturales obligadas a entregar los ROS están eximidas de toda responsabilidad legal.

Artículo 59 de la UNCAC

El artículo 59 promueve que los Estados Parte celebren tratados bilaterales o multilaterales teniendo presente el principio general de la restitución de bienes obtenidos mediante delitos tipificados con arreglo a la UNCAC, para aumentar la eficacia de la cooperación internacional.

Este artículo es facultativo para los países y está relacionado con lo expuesto en la respuesta del artículo 57, por lo que tienen que existir cambios legislativos respecto de la restitución de activos.

Conclusiones del Capítulo V

Como se puede observar en este informe, Chile ha fomentado la cooperación internacional, el intercambio de información, la celebración de convenios de cooperación, procesos bilaterales entre Estados miembros y, además, cuenta con la colaboración de las instituciones financieras para combatir la corrupción.

El país dispone de una legislación adecuada y, gracias a los procesos bilaterales, las instituciones tienen conocimiento de la legislación del país al que se va a recurrir, lo que facilita aún más la cooperación eficiente y rápida.

El Ministerio Público y el Poder Judicial cuentan con las atribuciones requeridas por la UNCAC y además, existe una red de representantes de las instituciones que intercambian experiencias cotidianamente y que asisten a diversos eventos donde se forman redes y se propicia el conocimiento y uso de las herramientas necesarias para implementar el Capítulo V de la Convención.

En cuanto a la restitución de activos, a partir de la base normativa existente, es posible avanzar en algunas áreas para crear las capacidades necesarias que permitan la aplicación cabal del artículo relativo a la recuperación y retorno de activos.

Finalmente, atendidas algunas dificultades prácticas en la administración de los bienes incautados se recomienda avanzar en el diseño de un mecanismo que pueda llevar a cabo la administración y gestión de los bienes para que éstos no se deterioren, así como su enajenación oportuna cuando sea necesario.

Santiago, 26 de junio de 2013.

ANEXO I

Metodología

Marco

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Chile”, buscó trabajar con los sectores público y privado, la sociedad civil organizada y la academia con el objetivo general de revisar de manera colaborativa los Capítulos II (medidas de prevención) y V (recuperación de activos) de la UNCAC. Los objetivos específicos que se planearon dentro del proyecto fueron efectuar un diagnóstico de la implementación en Chile de las materias reguladas en los Capítulos señalados de la Convención y de proponer las reformas o impulsar el uso de buenas prácticas necesarias para dar cumplimiento a las normas de dicho Acuerdo Internacional.

Para definir la metodología más apropiada para el proyecto se realizó un benchmarking de estrategias de mesas de trabajo participativas. Para el caso de Chile éste sería el primer ejercicio en el que se reuniría a una variedad de sectores a trabajar en la misma mesa respecto a temas de prevención de la corrupción.

En definitiva, como metodología se seleccionó la del diálogo participativo con el propósito de crear un proceso de debate y construcción colectiva entre los distintos integrantes de las mesas. En el Taller de Arranque del proyecto se presentó dicha metodología de trabajo, recogiendo las sugerencias de los participantes con el fin de complementarla.

Igualmente, con vistas a fortalecer el debate se circularizaron con anterioridad informes conteniendo resultados de la revisión de documentos nacionales y extranjeros vinculados con la temática, sus problemáticas y la experiencia comparada de los temas a analizar.

La metodología seleccionada fomentó la participación y la inclusión de las distintas instituciones participantes, siendo capaces de trabajar por sector y en conjunto para entregar una visión global sobre la situación de cumplimiento de las obligaciones contenidas en la UNCAC por parte del Estado de Chile, sobre todo respecto del Capítulo II de la Convención, ya que para el análisis del Capítulo V se redujo el número de participantes en la Mesa respectiva por el grado de especialización técnica que la discusión requería.

Actividades e Instituciones Participantes

El primer evento fue un desayuno de presentación del proyecto, al cual se invitó a 20 organizaciones gremiales, 20 entidades del sector público, nueve organizaciones sin fines de lucro con experiencia en temas de transparencia y participación ciudadana, y seis académicos. En este evento estuvieron representadas alrededor de 40 instituciones. El proyecto fue expuesto por el Contralor General de la República y el Representante Residente del PNUD.

Posteriormente se realizó un Taller de Arranque con los representantes de las instituciones participantes cuyo propósito fue definir los objetivos, precisar la metodología y acordar el plan de trabajo de manera participativa. La coordinación del proyecto elaboró un borrador de la metodología propuesta, incluyendo una agenda con fechas de reuniones, el cual se circularizó entre los participantes.

El trabajo se dividió en dos partes, la primera relativa a la revisión del Capítulo II de la UNCAC y la segunda, a la revisión del cumplimiento del Capítulo V. Asimismo, se definió en este primer Taller que los representantes trabajarían en mesas

sectoriales para precisar la posición de cada uno de los sectores público, privado, sociedad civil y académicos, respecto de los temas del Capítulo II de la UNCAC para posteriormente, en una Mesa Mixta presentar las posiciones de cada uno, abriéndose el debate para concluir, en definitiva, con un diagnóstico y una propuesta consensuada a cada tema. Se acordó que en caso de que no existir convergencia en un punto, la divergencia quedaría reflejada en el Informe.

Se verificó en la práctica que la división metodológica entre sectores permitió generar un espacio de confianza para el debate al interior de cada área respecto de la situación del país en términos de prevención de la corrupción, por un lado y, por otro, facilitó el diálogo para reconocer las dificultades señaladas por cada sector y determinar a partir de ellas recomendaciones, reformas o la promoción de buenas prácticas para fortalecer la institucionalidad del país en los términos requeridos por la UNCAC.

Entre julio y octubre 2012 se revisó el Capítulo II de la UNCAC y se realizaron para este cometido dos Mesas del Sector Público, dos Mesas del Sector Privado junto con la Sociedad Civil y la academia, y dos Mesas Mixtas con la participación de 20 a 25 instituciones en promedio, en cada una. Cada Mesa de Trabajo tuvo una duración aproximada de cuatro horas. El número y tipo de instituciones que asistieron a las Mesas de Trabajo y que, además, acordaron formar parte de una nueva alianza denominada Red Público-Privada Anticorrupción, se refleja en el siguiente cuadro¹⁷:

Tipo de Institución	Número de representantes
Sector Público	14
Sector Privado	5
Sociedad Civil	4
Academia	1
Organismo Internacional	1

Las instituciones que integran la Red Público-Privada contra la Corrupción son las siguientes:

1. Asociación Chilena de Municipalidades
2. Dirección de Compras Públicas (Chile Compra)
3. Comisión de Probidad y Transparencia
4. Contraloría General de la República
5. Consejo de Defensa del Estado
6. Consejo para la Transparencia
7. Corporación Administrativa del Poder Judicial
8. Ministerio de Justicia
9. Ministerio Público (Fiscalía Nacional)
10. Poder Judicial
11. Servicio Civil

17 | En este número se incluye a la Contraloría General de la República y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

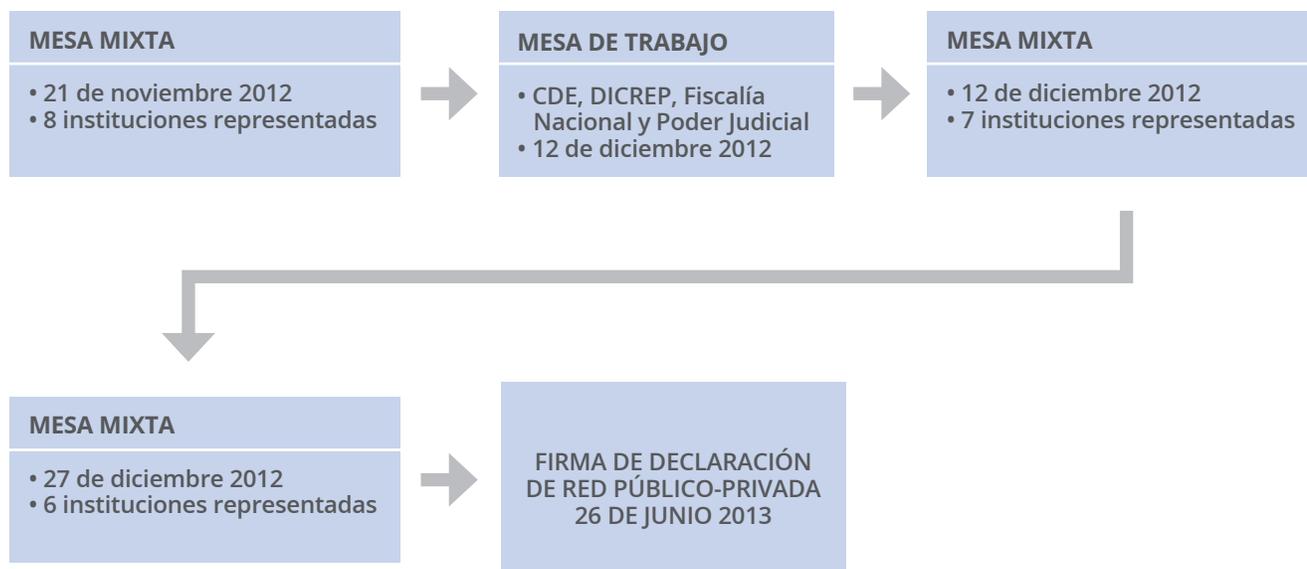
12. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
13. Superintendencia de Valores y Seguros
14. Unidad de Análisis Financiero
15. Asociación de Aseguradores de Chile
16. Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
17. Asociación de Empresas Eléctricas A.G.
18. Sociedad Nacional de Minería
19. Cámara Chilena de la Construcción
20. Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional
21. Ciudadano Inteligente
22. Casa de la Paz
23. Proceso
24. Universidad Alberto Hurtado
25. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Proceso de Revisión

A continuación se muestra el proceso seguido para llevar a cabo la revisión del Capítulo II de la UNCAC, con indicación del nombre de la actividad, la fecha en que ella se llevó a cabo y su duración, si corresponde.



A continuación se muestra el proceso seguido en el caso de la revisión del Capítulo V de la UNCAC, utilizando los mismos criterios indicados para el Capítulo II.



Metodología de las Mesas

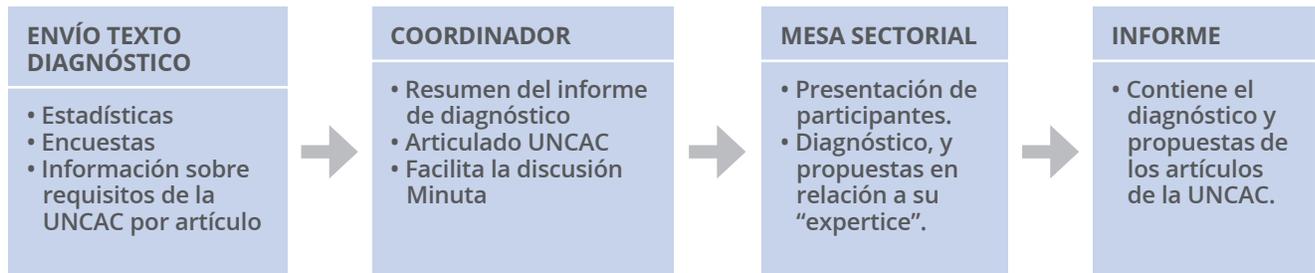
Como se mencionó anteriormente, dos semanas antes de la primera Mesa de Trabajo se hizo circular un informe entre los participantes para apoyar la discusión en las Mesas de Trabajo Sectoriales. Dicho documento, en el caso del Capítulo II de la UNCAC, contenía información sobre encuestas, estadísticas y los requisitos voluntarios y obligatorios de cada artículo revisado de la Convención. En el caso del Capítulo V, el informe respectivo contextualizaba los problemas que enfrentan los países debido al lavado del dinero obtenido de la corrupción, los mecanismos en la experiencia comparada sobre recuperación y administración de activos y los requisitos voluntarios y obligatorios de cada artículo de este Capítulo V.

Por otro lado, para facilitar la asistencia de los participantes a las Mesas de Trabajo, se fijó con anticipación el calendario de fechas de todas las reuniones.

En las Mesas Sectoriales, dirigidas por la coordinación del proyecto, fue presentado un resumen del informe de diagnóstico, a continuación de lo cual fue revisado el contenido de cada artículo de los capítulos en estudio para, posteriormente, abrir el debate entre los asistentes acerca de los puntos a tratar. El resultado obtenido fue un diagnóstico conjunto acerca del cumplimiento de cada artículo por parte del país y, para el caso de no cumplimiento o que fuera sólo parcial, se generaron propuestas para asegurar su concreción.

En la siguiente figura se presenta el proceso seguido en las Mesas Sectoriales:

Metodología de las Mesas Sectoriales



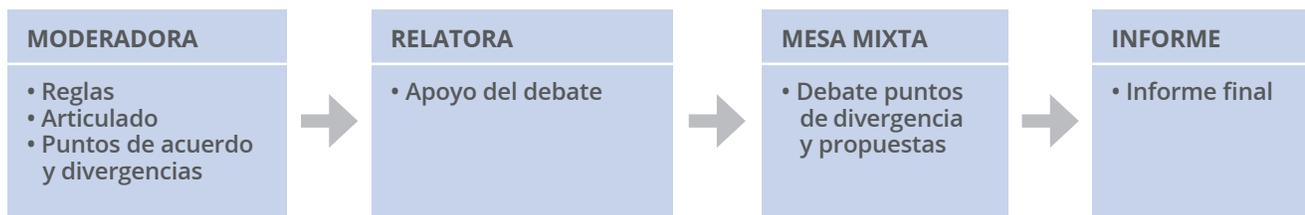
Por otro lado, el trabajo en las Mesas Mixtas (sector público, privado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia) fue guiado por una moderadora que explicó la dinámica de trabajo, animó el debate formulando preguntas que abrieran la discusión, reguló los tiempos de las intervenciones de los asistentes y, concluido el debate de cada tema, produjo un cierre con las conclusiones alcanzadas. Las mesas mixtas también fueron apoyadas con una relatora cuyo rol fue presentar someramente los puntos de divergencia, a fin de enfocar en ellos la conversación; adicionalmente se contó con la asistencia de un ayudante para tomar notas que sirvieran de base para documentar la experiencia.

Se estima que estas discusiones mixtas tuvieron gran efectividad, ya que al ofrecer a los asistentes la oportunidad de plantear sus puntos de vista a todas las instituciones y organizaciones presentes, en toda su diversidad, se contribuyó al fomento del diálogo y al intercambio de ideas y experiencias, reduciendo así significativamente diferencias surgidas de la falta de diálogo previo. Además, los participantes entregaron propuestas consensuadas en las áreas que había diferencia de opiniones. Con la información proveniente de las Mesas Mixtas, se redactó el Informe Final del Capítulo II que fue presentado a las instituciones en diciembre de 2012.

La estructura de todas las Mesas fue semiflexible, ya que existía una pauta que guiaba a la evaluación de los artículos de la UNCAC y, a la vez, daba espacio para recibir las opiniones de los asistentes o cambiar el orden de los artículos en revisión. Las sesiones, de cuatro horas, se dividían en una hora y media aproximadamente con su respectivo break.

En la siguiente figura se presenta el proceso seguido en las Mesas Mixtas:

Metodología de las Mesas Mixtas



Para la evaluación del estado de cumplimiento de los artículos del Capítulo V, referidos a los mecanismos de recuperación de activos, se realizaron tres Mesas de Trabajo Mixtas, reuniendo a representantes de ambos sectores en ellas. No fue necesario ni tampoco recomendable trabajar en Mesas Sectoriales por el grado de especialidad técnica del tema.

La participación de los representantes de las instituciones en las distintas mesas permitió generar un espacio fructífero de comunicación, donde se tejió una red de trabajo interinstitucional que permitió vincular a distintos agentes en la lucha contra la corrupción, proyectando su continuidad más allá de la duración del proyecto.

Lecciones aprendidas

De las lecciones positivas se pueden nombrar las siguientes:

- La metodología de trabajar en Mesas Sectoriales y Mixtas fue adecuada para preparar un diálogo fundado y reflexivo.
- Interrelación entre sectores público y privado: aprendizajes mutuos.
- Agenda conocida con suficiente anticipación. Se logró mantener la asistencia e interés de los asistentes a lo largo de diez meses de trabajo. Esto se facilitó debido a que las fechas de las reuniones fueron notificadas con bastante antelación y porque el diálogo logró nutrirse entre todos los participantes, logrando la continuidad.
- Productos esperados conocidos.
- Buenas prácticas identificadas o desarrolladas a partir de la ejecución del proyecto, como, por ejemplo: compromiso transversal, participación de niños y adolescentes, estrategia de difusión y el uso de recursos de difusión innovadores (teatro).
- Dar visibilidad a la Convención más allá de los actores públicos normalmente involucrados.

De las lecciones aprendidas que deberían tomarse en cuenta en la realización de un proyecto de este tipo se pueden enumerar las siguientes:

- Conveniencia de grabar todas las sesiones.
- Número adecuado de ayudantes tomando nota.
- Establecer una estructura de incentivos: como señala alguna literatura, los actores requieren incentivos para operar y ellos muchas veces se fundan en intereses concretos y no en el mero altruismo. Por lo mismo, la agenda de actividades y productos debe elaborarse a partir de una más detallada identificación de esos intereses específicos e intentar orientar el trabajo colectivo hacia la confluencia de esos intereses diversos.

ANEXO II

Estadísticas

Introducción

Uno de los propósitos del proyecto apunta a recolectar estadísticas que permitan analizar el cumplimiento de Chile respecto al Capítulo II de la UNCAC. A continuación se presentan las estadísticas que algunas entidades pueden recolectar por su función o por actividades que lleven a cabo.

Capítulo II de la UNCAC - Medidas de Prevención

Artículo 5

ID	UNCAC	Estadísticas
A.1	Formular, aplicar y mantener en vigor medidas coordinadas que promuevan la participación de un mayor número de sectores sociales en actividades de lucha contra la corrupción.	Actividades realizadas durante el año (#). Participantes (#) y sector representado por cada participante (# y % por sector). Instituciones públicas participantes – coordinadores/colaboradores (# e identificación).
A.2	Establecer prácticas eficaces contra la corrupción .	Ley de Transparencia Solicitudes de información (# y %). Reclamos ante el CPLT y sanciones impuestas (# y %). Buenas Prácticas Declaraciones de patrimonio e intereses verificadas (%) o publicadas (%); agendas de autoridades públicas (por autoridad, #).
A.3	Colaborar entre los Estados Parte y otras organizaciones internacionales y regionales.	Número de solicitudes enviadas (comparación por años). Número de solicitudes recibidas (comparación por años). Tasa de solicitudes enviadas/recibidas procesadas exitosamente.

Artículo 6

ID	UNCAC	Estadísticas
B.1	Contar con recursos materiales y personal especializado.	Presupuesto general de la entidad/presupuesto para actividades anticorrupción. (\$ y %)
B.2	Contar con recursos para capacitar al personal encargado de prevenir y combatir la corrupción.	Tasa de cobertura de capacitaciones de probidad.

Artículo 7

ID	UNCAC	Estadísticas
C.1	Sistema de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos basados en el mérito, la equidad y la aptitud.	Convocatorias/Contrataciones (# y %). Convocatorias/Convocatorias desiertas (# y %). Porcentaje y tendencia de puestos que utilizan el SADP.
C.2	Fomentar una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas.	Tendencia de salarios (%). Comparación de escala de sueldos con países OCDE (ajustando por PPP).
C.3	Adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses , o a mantener y fortalecer dichos sistemas.	Ley de Probidad Declaraciones de patrimonio e intereses verificadas al entrar y salir del gobierno (# y %). Contraloría Denuncias de conflictos de interés en el Portal Ciudadano (#).

Artículo 8

ID	UNCAC	Estadísticas
D.1	Establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.	Solicitudes de protección al denunciante de buena fe (#) Denuncias investigadas/ sancionadas (# y %).

Artículo 9

ID	UNCAC	Estadísticas
E.1	La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas.	Publicación de licitaciones/Adjudicaciones (#, \$, %). Resultados de encuestas a proveedores.
E.2	Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos.	Reclamos de irregularidades/ total de procesos investigados y resultados (# y %). Tribunal Contratación Pública Causas/Sentencias ejecutoriadas (# y %).
E.3	Adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.	Capacitaciones a encargados/resultados de prueba (# y %). Declaraciones de interés/abstenciones (# y %).
E.4	Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno. Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos.	CGR Auditorías a licitaciones adjudicadas (# y %). Auditorías con resultados irregulares (# y %). Auditorías/sanciones (# y %).

Artículo 10

ID	UNCAC	Estadísticas
F.1	Información sobre la administración pública: organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones.	Tendencia del ranking transparencia activa del CPLT. Tendencia grado de satisfacción con información activa del CPLT. Cumplimiento programa OGP.
F.2	Información pública sobre las decisiones y actos jurídicos con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales.	Solicitudes de información pública sobre decisiones y actos jurídicos/reclamos (# y %). Solicitudes de información pública/solicitud de transparencia de datos personales (# y %).

Artículo 11

ID	UNCAC	Estadísticas
G.1	<p>Mecanismos de rendición de cuentas que el propio poder judicial se haya fijado y el ministerio público si corresponde.</p> <p>Objetivo: Eficacia de las políticas y procedimientos.</p>	<p>Solicitudes de información pública a la Comisión de Transparencia/ reclamos (# y %).</p> <p>Reclamos o denuncias contra autoridades judiciales/ sanciones aplicadas (# y %).</p> <p>Declaraciones patrimoniales y de intereses (# y %).</p> <p>Tasa de verificación de las declaraciones.</p>

Artículo 12

ID	UNCAC	Estadísticas
H.1	<p>Promover la formulación de normas y procedimientos, como códigos de conducta, la transparencia y guías de buenas prácticas comerciales. Prevenir los conflictos de intereses.</p>	<p>Actividades realizadas de promoción (#).</p>
H.2	<p>Velar por que las empresas privadas dispongan de buenos controles contables internos.</p>	<p>Solicitudes de información pública sobre decisiones y actos jurídicos/reclamos (# y %).</p> <p>Solicitudes de información pública/solicitud de transparencia de datos personales (# y %).</p>

Artículo 13

ID	UNCAC	Estadísticas
I.1	Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones.	Intervención de la ciudadanía en las comisiones del Congreso (tendencia).
I.2	Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios. Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción.	Programas de ética o civismo en: Escolares (# programas, # estudiantes, # escuelas o colegios y %). Universitarios (# programas, # estudiantes, # universidades y %). Noticias de corrupción (# y tendencia).
I.3	Facilitar el acceso al órgano u órganos para la denuncia de todo incidente o acto que pueda considerarse constitutivo de un acto contrario a la probidad o de un delito tipificado con arreglo a la Convención.	Portal de denuncias ciudadanas CGR Denuncias/Resultados (# y tendencia). Portal del Ministerio Público Ídem

Artículo 14

ID	UNCAC	Estadísticas
J.1	Denunciar las transacciones sospechosas deben denunciarse a la dependencia de inteligencia financiera u otra autoridad designada.	ROS enviados a Fiscalía (# y %). Denuncias MP/Términos (# y %).
J.2	Aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y títulos negociables.	Movimientos/Detecciones (#, \$ y %). Número de declaraciones de porte y transporte de efectivo vs. ROS enviados a Fiscalía sobre esta materia.
J.3	Aplicar medidas para exigir a las instituciones financieras que reúnan información sobre los remitentes de transferencias electrónicas de fondos.	Reportes transferencias/Reportes incompletos o sospechosos (# y %).
J.4	Establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre autoridades competentes a fin de combatir el lavado de dinero.	Número de solicitudes enviadas (comparación por años). Número de solicitudes recibidas (comparación por años). Tasa de solicitudes enviadas/recibidas procesadas exitosamente.

ANEXO III

Campaña de difusión

Campaña de Difusión

Habiéndose determinado que era necesario fomentar la difusión de información relacionada con la transparencia y probidad a la ciudadanía, se creó una sub-mesa encargada de definir los ejes principales de una campaña de difusión.

Esta mesa estuvo integrada por la Casa de la Paz, Chile Compra, Chile Transparente, Ciudadano Inteligente, Consejo de Defensa del Estado, Consejo para la Transparencia, Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unidad de Análisis Financiero.

En ella se estimó que uno de los objetivos de la campaña debía consistir en hacer ver al ciudadano que la corrupción es un problema y responsabilidad de todos en el cual, muchas veces, las personas participan de forma activa y tal vez inadvertidamente.

Por ello la campaña se estructuró en tres etapas:

1. Difusión general a la ciudadanía por medio de materiales y afiches, incluyendo las siguientes acciones:

- Creación de la Campaña “No mancho mi conciencia. Vivo sin corrupción” lanzada el 10 de diciembre de 2012 ante más de un centenar de asistentes. El material de la campaña se puede encontrar en el siguiente link:

i. Evento de Lanzamiento:

http://www.youtube.com/watch?v=umFn_fhWsas&list=PLY-jfcATJzRmsYe7v1rUhzkVbFcxpXd

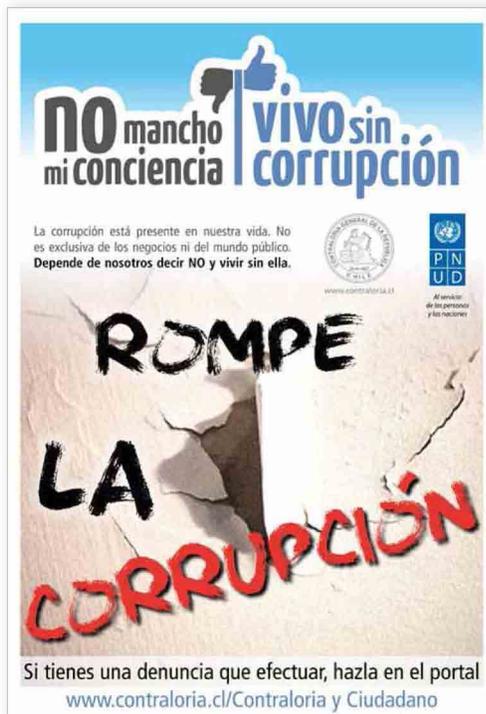
ii. Material:

<http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Sitios/PNUD/Index.html>

- Distribución de 5.000 cómics en Santiago y algunas regiones, con ejemplos de una mala y buena práctica en contextos cotidianos. Disponible en el siguiente link: <http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Sitios/PNUD/Campanna/Comic>



- Publicación de 1.000 afiches ubicados en lugares de alta afluencia de público en Santiago y regiones (estaciones del Metro, estaciones de buses, etc.).



- Instalación de gigantografías en calles de alta afluencia de Santiago con el logo de la Campaña e invitando a las personas a utilizar el Portal Ciudadano de la CGR.



- Sitio WEB con 817 visitas mensuales. Disponible en el siguiente link: <http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Sitios/PNUD/Index.html>



- Twitter con 907 seguidores. Disponible en el siguiente link: <https://twitter.com/VivosinCorrup>



- Facebook con un alcance mensual de 20.355 personas aproximadamente. Disponible en el siguiente link: <https://www.facebook.com/Vivosincorruccion>



2. Difusión de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a través de talleres en regiones.
 - Dos talleres, uno en Iquique (50 personas) y otro en Punta Arenas (50 personas), donde expusieron representantes del Consejo de Defensa del Estado.
3. Difusión de valores como la participación, transparencia y justicia a estudiantes de sexto año de Educación Básica.
 - Se presentó en colegios (900 estudiantes de sexto básico) de Santiago una obra teatral montada por el grupo "Cultura Hilvanada", seguida de una actividad lúdica relativa a los valores observados en la obra y que se vinculan con el programa de estudio del Ministerio de Educación. Posteriormente los asistentes crearon cuentos o cómics centrados en las buenas o malas prácticas de la vida cotidiana estudiantil; los tres mejores trabajos serán premiados.

Finalmente, se aplicó un Test de Likert para medir el potencial cambio en las actitudes de los y las participantes.

- Facebook has a scope of roughly 20,355 people and 534 fans. Available online at: <https://www.facebook.com/vivosin corrupcion>



- Information on Law 20,393 on Criminal Responsibility of Legal Persons was provided to the public at regional workshops.
 - Two workshops were held—one in Iquique (50 people) and one in Punta Arenas (50 people)—with representatives from the State Defence Council.

- Activities were held with sixth graders to educate them on certain values such as participation, transparency and fairness.
 - The theatre group "Cultura Hilvanada" put on a play for 900 sixth graders at different middle schools and at the Children's Museum, followed up by role-playing to illustrate values acted out during the play and contained in the Ministry of Education's curriculum. Afterwards, assistants helped students create comic strip and stories focusing on the good and bad practices of everyday life at school; the top three will receive an award. Finally, the Likert scale was administered to measure potential changes in the boys' and girls' attitudes.

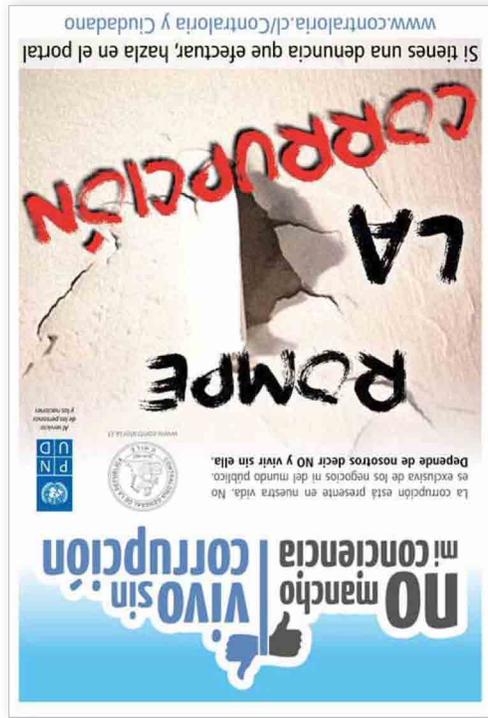


- Twitter with 832 followers. Available online at: <https://twitter.com/VivosinCorrupcion>



- Web site has 817 hits monthly. Available online at: <http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Sitos/PNUD/index.html>

- One thousand posters were printed and hung up in high-traffic public areas throughout Santiago and regions (Metro stations, bus stations, etc.).



- Large signs showing the campaign's logo and inviting people to access CGR's Citizens' Portal were hung up along Santiago streets with a great deal of pedestrian traffic.



Dissemination Campaign

Having determined that it is necessary to promote the dissemination of information on transparency and probity to the general population, a sub-working group was set up to define the main points of a dissemination campaign.

The following organizations took part in this working group: Casa de la Paz, Chile Compra, Chile Transparente, Ciudadano Inteligente, State Defence Council, Transparency Council, Office of the Comptroller General of the Republic, Ministry of Justice, Ministry General Secretariat of the Presidency, United Nations Development Program, and the Financial Analysis Unit.

Group members decided that one of the objectives of the campaign should be making citizen aware that corruption is everyone's problem and responsibility, and how people are often actively and possibly inadvertently involved.

The campaign was broken down into three stages:

1. **Widespread dissemination to the public** by way of materials and posters, including the following activities:

- Campaign "No mancho mi conciencia. Vivo sin corrupción" ("I won't stain my conscience. I live corruption free") launched on 10 December 2012 in front of a crowd of more than 100 people. Campaign information is available online at:
 - i. Launch: http://www.youtube.com/watch?v=umFn_fhWsa&list=Ply-ffcATJzJzRmsVye7v1rUhzkVbFcxpxd
 - ii. Materials: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portal2/cgr/v3ESP?_nfpb=true&_pagelabel=P1820023968128622625111

- Five thousand comic books were distributed throughout Santiago and a few regions, showing examples of good and bad practices in everyday settings. Available online at: <http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Sitios/PNUD/Campanna/Comic>



Dissemination Campaign

ANNEX III



Article 13

ID	UNCAC	Statistics
1.1	Enhance transparency and promote citizen participation in decision-making processes.	Involvement of citizens in congressional committees (trend).
1.2	Hold public information activities to promote zero tolerance of corruption, in addition to public education programs at a school and university level. Respect, promote and protect the freedom to search for, receive, publish, and disseminate corruption-related information.	Ethics or civics programs at: Schools (# of programs, # of students, # of public and private schools and %). Universities (# of programs, # of students, # universities and %). Corruption-related news (# and trend).
1.3	Facilitate access to government body or bodies to lodge complaints on any incident or offence that may constitute an anti-probity offence or a crime subject to the Convention.	CGR's Citizen Complaint Portal Claims/Outcome (# and trend). Public Prosecutor's Office Portal Idem.

Article 14

ID	UNCAC	Statistics
1.1	Report all suspicious transactions to the financial intelligence unit or other designated authority.	ROS sent to DA's Office (# and %). Prosecutor's Office Complaints /Terms (# and %).
1.2	Apply viable measures to detect and watch for cross border movement of cash and negotiable instruments.	Movements/Detections (#, \$ and %). Number of statements of freight and transport of cash vs. ROS sent to DA's Office regarding this matter.
1.3	Apply measures to require that financial institutions collect information on individuals conducting electronic funds transfers.	Transfer reports/Incomplete or suspicious reports (# and %).
1.4	Set up and promote global, regional, sub regional and bilateral cooperation among competent authorities with a view to fighting against money-laundering.	Number of requests sent (annual comparison). Number of requests received (annual comparison). Rate of requests sent/successfully received and processed.

Article 11

ID	UNCAC	Statistics
G.1	Accountability mechanisms set up by the judiciary itself and Public Prosecutor's Office, when appropriate.	Requests for public information submitted to the Transparency Commission/claims (# and %). Complaints or claims against judicial authorities/Penalties applied (# and %). Statements of Net Worth and Interests (# and %). Statement verification rate.

Article 12

ID	UNCAC	Statistics
H.1	Promote the drafting of rules and procedures, such as codes of conducts, transparency, guides to good commercial practices. Prevent conflicts of interest.	Promotion activities held (#).
H.2	Ensure private companies have good internal controls.	Oversight Activities/Penalties (# and %).

Article 9

ID	UNCAC	Statistics
E.1	Publicly dissemination of information on government hiring processes and contracts, including disclosures on tenders and timely or relevant information on contract awarding in order to give prospective bidders enough time to prepare and submit bids.	Publishing tenders/Awards (#, \$, %). Outcome of supplier surveys.
E.2	Effective internal analysis mechanism, including an effective appeals system, in order to guarantee legal recourse and remedies when rules and procedures set down are not followed.	Claims of irregularities/Total processes investigated and outcome (# and %). Public Hiring Tribunal Causes/Guilty judgments (# and %).
E.3	Adopting measures to regulate issues that concern personnel in charge of government hiring, specifically statements of interests, for certain public hiring processes, pre-hiring procedures and training requirements.	Training undertaken/Test results (# and %). Statements of Interests/Abstentions (# and %).
E.4	Effective and efficient risk management and internal control systems. When appropriate, adopting corrective measures in case of non-compliance with stipulated requirements.	CGR Audits of tenders awarded (# and %). Audits with irregular outcomes (# and %). Audits/Penalties (# and %).

Article 10

ID	UNCAC	Statistics
F.1	Information on public administration: organizations, functions, decision-making process.	Trends in the Transparency Councils' (CPLT) active transparency ranking. Trends in degree of satisfaction with active CLPT information. Compliance with OGP Program.
F.2	Public information regarding legal proceedings and decisions with due respect for protecting privacy and personal information.	Requests for public information regarding legal decisions and proceedings/Claims (# and %). Requests for public information/transparency for personal information requests for transparency (# and %).

Article 7

ID	UNCAC	Statistics
C.1	System for the recruitment, hiring, retention, promotion and retirement of civil servants that is based on merit, equity and aptitude.	Recruitment/Hiring (# and %). Recruitment/Abandoned Hiring Processes (# and %). Percentage and trends of positions using the SADP.
C.2	Encourage appropriate remunerations and fair pay scales.	Salary trend (%). Comparing pay scale of other OECD countries (Adjusted for PPP).
C.3	Adopt systems aimed at promoting transparency and preventing conflicts of interest or upholding and enhancing said systems.	Probity Law Statements of Net Worth and Interests verified upon entering and leaving government positions (# and %). Office of the Comptroller General Complaints regarding conflicts of interest on Citizens Website (#).

Article 8

ID	UNCAC	Statistics
D.1	Implement measures and systems to facilitate the reporting by public officials of acts of corruption, when such acts come to their notice in the performance of their functions.	Requests to protect good faith whistleblowers (#). Complaints investigated/punished (# and %).

Introduction

One of the purposes of this process was to gather statistics that would allow for measuring Chile's compliance with Chapter II of the UNCAC. The following section describes the statistics that some entities may be able to collect as a result of their activities or functions:

Chapter II of the UNCAC - Prevention Measures

Article 5

ID	UNCAC	Statistics
A.1	Draft, apply and keep in effect coordinated measures to promote the participation of a large number of social sectors in anti-corruption activities.	Activities held during the year (#). Participants (#) and sector represented by each participant (# and % by sector). Public institutions involved – coordinators/ collaborators (# and name).
A.2	Set up effective anti-corruption practices.	Transparency Law Requests for information (# and %). Complaints submitted to Transparency Council (CPLT) and penalties imposed (# and %). Good Practices Statements of Net Worth and Interests verified (%) or published (%); agenda of public authorities (by authority, #). Number of requests submitted (annual comparison). Number of requests received (annual comparison). Rate of successfully-processed requests submitted/received.
A.3	Collaboration among States Parties and other international and regional organizations.	

Article 6

ID	UNCAC	Statistics
B.1	Have material resources and specialized personnel.	Entity's overall budget/budget for anti-corruption activities. (\$ and %).
B.2	Have resources to train personnel in charge of preventing and fighting against corruption.	Probity training coverage rate.

Statistics

ANNEX II

Lessons Learned

The positive lessons learned are as follows:

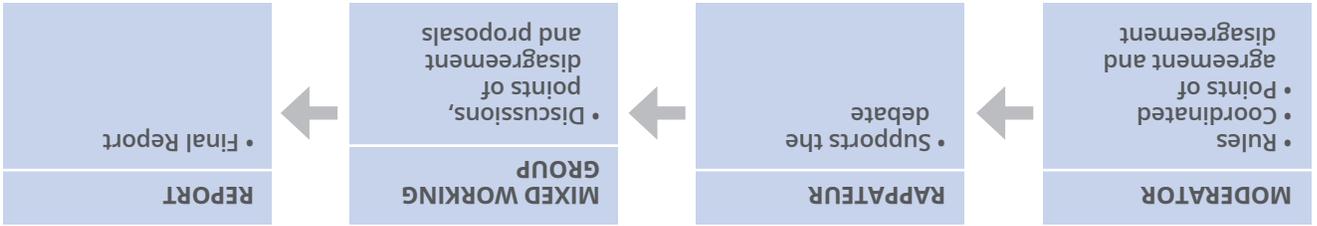
- The working methodology for the sectoral and mixed working groups was sufficient to lay the ground for well-founded and contemplative dialogue.
- Combining public and private sectors led to mutual learning.
- Making the agenda known with enough advance warning enhanced attendance and interest among participants throughout the ten months of work. This was facilitated by the fact that participants were notified of meeting dates well in advance and dialogue was enriched by participation of all members, making way for continuity.
- Expected outcomes known.
- Good practices identified and developed following project execution, such as: cross-cutting commitment, participation of children and teenagers, dissemination strategy and use of innovative awareness-raising resources (theatre).
- Greater visibility was given to the Convention beyond the sphere of public stakeholders usually involved.

The following lessons learned should be taken into consideration when implementing a project of this type:

- It is wise to record all sessions.
- Be sure to have the right number of assistants taking notes.
- Set up an incentive system: according to literature, stakeholders need incentives to operate; they often act out of concrete interests and not necessarily for philanthropic reasons, hence the importance of drafting a general agenda with a description of activities and desired outcomes, based on a more detailed program that identifies specific interests and is focused on guiding group work so that it converges around various interests.

The figure below illustrates the process followed by mixed working groups:

Mixed Working Group Methodology

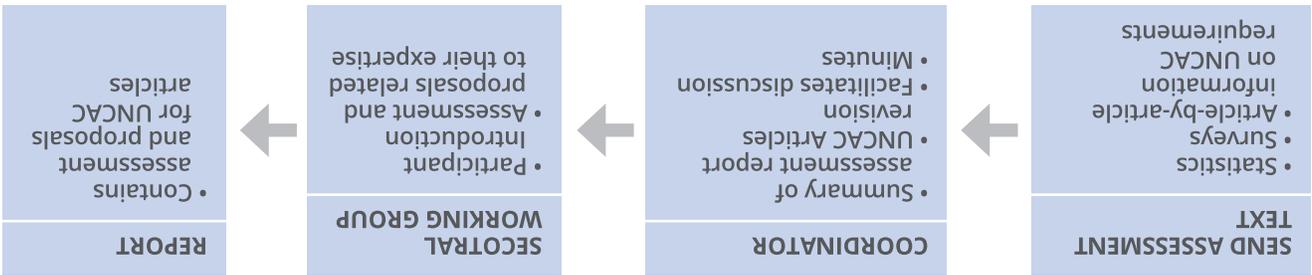


Three mixed working groups were held to assess Chile's compliance with Chapter V articles referring to asset recovery. Participants from both sectors took part in these meetings and it was neither necessary nor recommendable to hold sectoral working groups given the degree of technical expertise on this topic.

Participation by institutional representatives was conducive to fruitful discussions during which they set up an inter-institutional working network to link up the various stakeholders involved in the fight against corruption. There is every intention to keep the network afloat once this project is complete.

Sectoral Working Group Methodology

The figure below illustrates the process followed by sectoral working groups:

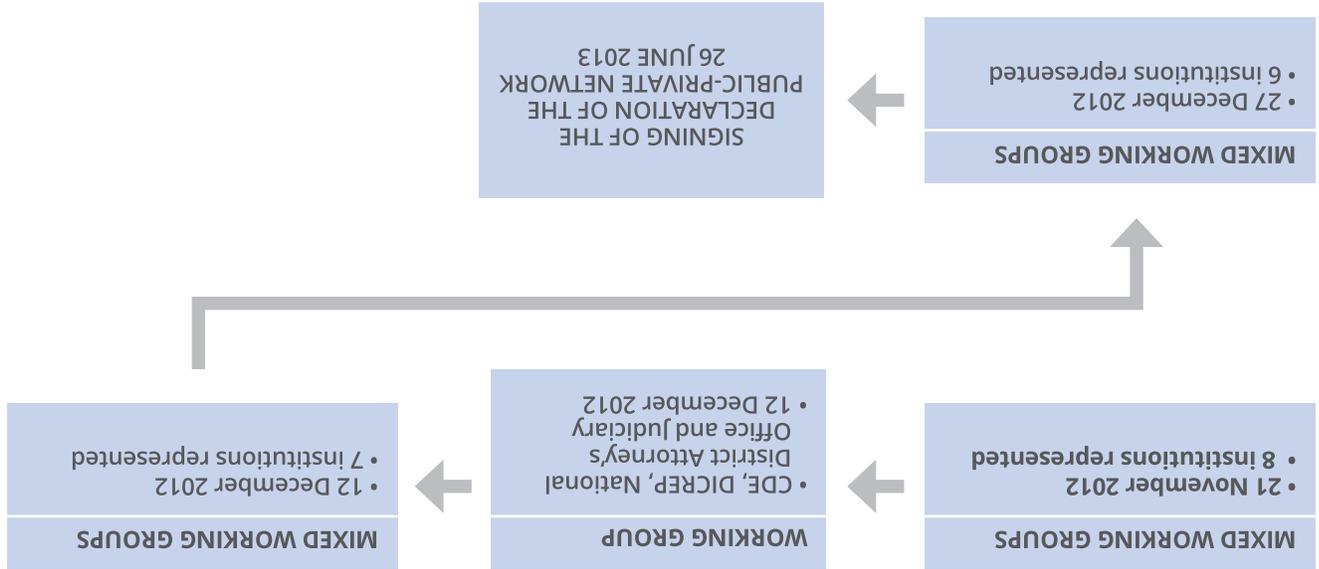


Furthermore, work undertaken by mixed working groups (public and private sectors, organized civil society, and academia) was guided by a moderator who explained the work dynamics, encouraged debate by posing questions leading to discussion, served as time keeper for participant remarks and offered closing remarks recapping the conclusions reached, following individual debates on each subject. Mixed working groups also received support from a rapporteur whose role was to briefly present contrary opinions, which were to serve as a springboard for discussion. There was also an assistant present who took notes to document the experience later.

These mixed discussions were quite effective in that they provided participants with the opportunity to express their opinions in front of the wide array of institutions and organizations present at the meeting. This of course was crucial to fostering dialogue and a free flow of ideas and experiences, which significantly aided in smoothing out differences previously existing because of a lack of communication. Moreover, participants submitted proposals agreed to by all on previously contentious matters. Information provided by mixed working groups served as input for the Chapter II Final Report which was submitted to the institutions in December 2012.

All working groups were conducted in keeping with a semi-flexible structure, involving a guideline to review UNCAC articles while also leaving room for participant remarks or changing the order in which articles were reviewed. Each four-hour meeting was divided into two, one and a half hour sessions approximately with respective breaks.

The following is a description of the UNCAC Chapter V review process. The same criteria were applied to the Chapter II and V reviews.



Working Group Methodology

As previously mentioned, a report was sent out to all working group members two weeks prior to the first working group, as an aid for sectoral working group discussions. This document contained information regarding surveys, statistics, and voluntary and mandatory requirements set forth under every article under review in Chapter II of the UNCAC. Regarding Chapter V of the UNCAC, the report provided background information as context for issues countries face regarding money-laundering of the proceeds of corruption, comparative experiences in asset recovery and administration, and voluntary and mandatory requirements established under every article in Chapter V.

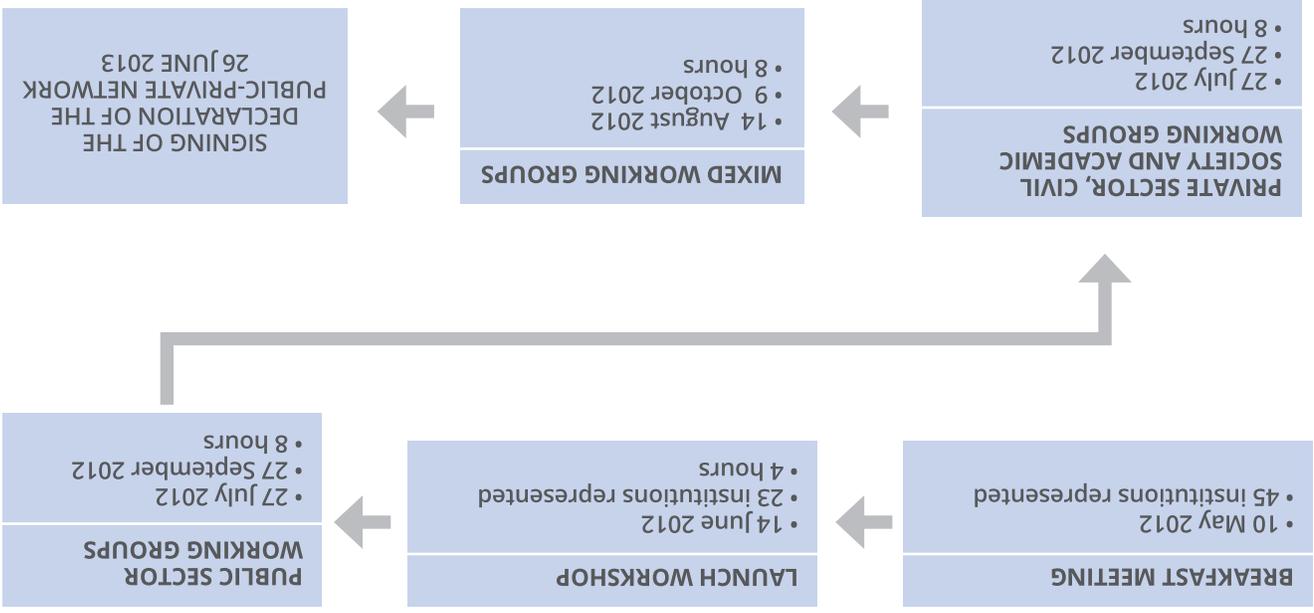
Furthermore, the meeting schedule was determined in advance in order to encourage greater participation in the working groups.

Sectoral working groups were organized and led by process coordinators. Working group members received a summary of the review report; they studied the contents of each article in the chapters under review, followed by a debate to determine which points they were going to discuss. The outcome was a joint assessment of Chile's compliance with each article and, in cases of non-compliance or partial compliance, the group came forward with proposals to bring those articles into compliance.

12. Office of the Superintendent of Banks and Financial Institutions
13. Office of the Superintendent of Securities and Insurance
14. Financial Analysis Unit
15. Chilean Association of Insurance Companies (Asociación de Aseguradores de Chile)
16. Chilean Association of Banks and Financial Institutions (Asociación de Bancos e Instituciones Financieras)
17. Chilean Association of Electric Power Companies (Asociación de Empresas Eléctricas A.G.)
18. National Society for Mining (Sociedad Nacional de Minería)
19. Chilean Chamber of Construction
20. Chile Transparente, Chilean Chapter of Transparency International
21. Ciudadano Inteligente
22. Casa de la Paz
23. Proceso
24. Alberto Hurtado University
25. United National Development Program

Review Process

The following is a description of the UNCAC Chapter II review process, including names, dates and duration of activities held.



and academia on the matters addressed in Chapter II of the UNCAC. These positions were subsequently revealed during a Mixed working group meeting, with an ensuing debate that eventually concluded with a topic-by-topic assessment and proposal agreed to by all. Group members also agreed that any disagreement should be reflected in the report.

During the meetings it was possible to verify that the methodological division of sectors was helpful in building trust among stakeholders to allow for debates concerning Chile's current status on corruption prevention in each area. This also gave way to dialogue in which participants acknowledged difficulties pointed out by each sector and subsequently drew up recommendations, reforms or ideas to promote good practices aimed at enhancing Chile's institutional as required under the UNCAC.

Chapter II of the UNCAC was reviewed during the July-October 2012 period. Two public sector working groups, two private sector/civil society/academia working groups, and two mixed working groups (with 20-25 stakeholders in each group) were set up for this purpose. Each working group met for approximately four hours in each meeting. The table below illustrates the number and type of stakeholders attending the working groups, and who also agreed to set up a new partnership entitled the Public-Private Anti-Corruption Network¹⁸:

Institution Type	Number of Representatives
Public Sector	14
Private Sector	5
Civil Society	4
Academia	1
International Organizations	1

The following institutions make up the Public-Private Network against corruption:

1. Chilean Association of Municipalities
2. Direction of Public Procurement (ChileCompra)
3. Transparency and Probity Commission
4. Office of the Comptroller General of the Republic
5. State Defence Council
6. Transparency Council
7. Administrative Corporation of the Judiciary
8. Ministry of Justice
9. Public Prosecutors Office
10. Judiciary
11. Civil Service

Framework

The UNCAC Participatory Self-Assessment project conducted in Chile was intended to be a joint effort carried out by the public and private sector, organized civil society and academia with a view to undertaking a collaborative review of Chapter II (prevention measures) and Chapter V (asset recovery) of the UNCAC. Specific objectives outlined for this project were as follows: conducting an assessment on Chile's implementation of matters governed under Chapters II and V of the Convention; and proposing reforms or spearheading the use of good practices required to bring Chile into compliance with this International Agreement.

A benchmark study was conducted on participatory working group strategies in order to determine the most appropriate methodology for this process. This was the first exercise carried out in the Chilean project that brought together various stakeholders to work in the same group on anti-corruption issues.

The methodology ultimately selected was the participatory dialogue methodology since it seeks to stimulate collective debate and a consensus building process among the various stakeholders taking part in the process. This working methodology was presented at the initial stakeholder workshop held to launch the process. Participants' suggestions were collected as input.

Likewise, with a view to including debate, reports were sent to participants in advance containing the outcome of a review of national and foreign corruption-related documents, main issues addressed therein and a comparative review of issues addressed.

The methodology selected enhanced participation and involvement of several stakeholder institutions, which were able to work on a joint and sectoral basis in order to deliver a global view of the Chilean States' UNCAC compliance status, primarily regarding Chapter II compliance since there were fewer stakeholders involved in the Chapter V working group given the degree of technical expertise required for the discussion.

Activities and Stakeholders

The first event consisted of a breakfast meeting to present the process. The following stakeholders were invited: 20 trade organizations, 20 government agencies, nine non-profit organizations with experience in transparency and citizen participation issues, and six members of academia. Close to 40 institutions were represented at this meeting where the Comptroller General of the Republic and the Resident Representative of the UNDP presented the project.

An initial stakeholder workshop was launched with representatives from the mentioned institutions. The purpose of this workshop was to define objectives, determine the working methodology and agree to a working plan, all in a participatory fashion. Project coordinators drew up a first draft of the methodology proposed, including an agenda with meeting dates, and passed it around for stakeholders to view.

Work was divided into two parts: the first part consisted of a review of Chapter II of the UNCAC; and the second part entailed a review of Chile's compliance with Chapter V. It was also decided at this initial workshop that representatives would work in sectoral working groups to specify the respective stances of the public sector, private sector, civil society

Methodology

ANNEX I

Chapter V Conclusions

As one may glean from this report, Chile has fostered international cooperation, information disclosure, the signing of cooperation agreements, bilateral processes between Member States and is joined by financial institutions in the fight against corruption.

Chile has appropriate legislation and, given bilateral processes, institutions are aware of the legislation of the country from which they are going to request support. This makes cooperation increasing efficient and speedy.

The Public Prosecutor's Office and Judiciary have the necessary power and duties as required under the UNCAC. Moreover, there is a network of institutional representatives who exchange information on everyday experiences and attend gatherings where they can further expand their network and hone their knowledge and use of skills necessary for implementing Chapter V of the Convention.

Concerning the return of assets, current legislation may serve as a spring board for building the capacity required to fully implement the UNCAC article governing asset recovery and return.

Finally, once a few practical concerns are resolved pertaining to the administration of confiscated property, it would be recommended to begin designing a mechanism capable of administering and managing confiscated property, to prevent it from deteriorating, and timely disposing of it when necessary.

Santiago, 26 June 2013

Returning assets confiscated in cases of corruption to a requesting State is not regulated under Chilean law. Article 469 of the Code of Criminal Procedure provides that "money and other confiscated assets shall be sent to the Administrative Corporation of the Judiciary" and "all other confiscated property shall be made available to the General Directorate of Collateral Loans for disposal of at public auctions or shall be destroyed if worthless" and proceeds from sales shall be sent to the aforementioned Corporation. Likewise, other items retained and not confiscated under Article 470 shall be sold at public auction if not claimed by legitimate owners, and proceeds from the sale shall be sent to the Administrative Corporation of the Judiciary.

Furthermore, Article 46 of Law 20,000 also governs the disposal of confiscated property, providing that it shall be disposed of at public auctions held by the General Directorate of Collateral Loans, and the proceeds of sale shall be deposited in a special fund managed by the National Agency for the Prevention and Rehabilitation of Drug and Alcohol Use. Property confiscated in relation to money-laundering shall be disposed of similarly, in accordance with Law 19,913.

Article 58 of the UNCAC

This article provides that States Parties shall cooperate with one another and shall consider establishing an independent financial intelligence unit to be responsible for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities reports of suspicious financial transactions. Financial institutions shall be protected so that they disclose information in good faith.

Chile is in full compliance with this article since its Financial Analysis Unit (UAF) is the body responsible for preventing money-laundering (ML) and terrorism financing (TF) in Chile. Accordingly, the UAF receives reports of suspicious transactions (ROS) from 4,116 natural persons and legal entities. This institution employs financial intelligence procedures and has concluded assistance agreements with other institutions in order to broaden its access to information sources. The UAF exchanges information with counterpart financial intelligence units abroad. In 2011, the UAF sent the National Public Prosecutor's Office 150 reports of suspicious transactions (ROS) related to money-laundering and terrorism financing. The last paragraph in Article 3 of Law 19,913 (creating the financial analysis unit and amending several provisions concerning money-laundering), provides that natural and legal persons bound by law to submit ROS, who submit information in good faith, are exempt of all legal responsibility.

Article 59 of the UNCAC

Article 59 provides that States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements taking into account the general principle of returning property obtained from offences subject to the UNCAC, to enhance the effectiveness of international cooperation.

This article is binding on all countries and is related to that which is set forth under Article 57, and, accordingly, there needs to be change in legislation governing asset return.

This article does not allow States Parties a great deal of discretionary authority. It provides that States Parties shall adopt such legislative and other measures that ensure there are no barriers to returning property confiscated in corruption cases treated under the UNCAC, when a firm guilty verdict has been handed down (except for when perpetrators cannot be tried because of death, absence, fleeing, etc.), and when the requesting State Party reasonably establishes its prior ownership or recognizes damages caused. The requesting State may deduct reasonable expenses incurred. This restitution process shall be carried out in accordance with the fundamental principles of the requesting State's domestic law, taking into account the rights of bona fide third parties. When returning property, requested States shall also recognize prior legitimate owners or compensate victims of the offence.

Article 57 of the UNCAC

Concerning spontaneous cooperation, it was explained that there has been informal cooperation among States. However, it is still necessary to set up networks that would allow for seamless spontaneous disclosure among States Parties and provide information to States Parties as to what agencies should be contacted.

State so that DICCREF may dispose of it later at public auctions. the possibility of implementing a procedure allowing the CDE to request the registration of property in the name of the Collateral Loans (DICCREF), Public Prosecutor's Office and the Judiciary to address this matter. The working group discussed members of perpetrators. A special session was held with the State Defence Council (CDE), General Directorate of property at public auction that has not been able to be auctioned off and remains in the hands of third parties or family Similarly, the working group remarked on the need to make headway regarding the disposal of confiscated real state or whose storage may be difficult or costly, which would also be in keeping with Article 40, paragraph 4 of Law 20,000.

Discussions were held during the working group on the need to have a mechanism that would efficiently administer confiscated property in order to prevent it from deteriorating. This is common in other countries that have special agencies or funds to administer this type of property. The discussion also touched on the concept of "early sell" to prevent assets from being damaged or, in the case of assets not so readily handled due to their nature (animals, cars, farms, etc.), the group suggested selling the assets, and sales proceeds would be managed by the administrative mechanism. In the event the individual convicted were to be absolved of the crime, a sum equal to the value of the property, adjusted for inflation and with interest, would be returned to the individual. This would be feasible if Article 188 of the Code of Criminal Procedure were to be amended to include the disposal of through direct sale or auction of property that is susceptible to deterioration

However, Chile is expected to be in compliance with the international cooperation aspect regarding confiscation in the mid-term, since at present, there is a bill which seeks to amend Law 19,913¹⁶ and allow for confiscation of property for a sum equivalent to the amount related to the crime investigated; and when a guilty judgement is handed down, the court shall rule in favour of confiscating other property that is also deemed proceeds of the crime.

Articles 54, 55 y 56 of the UNCAC

These regulations will be addressed as a whole in the following paragraphs since the subject matter they cover is quite similar, barring slight differences:

Article 54 refers to mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation. The objective of this article is to ensure that States Parties have an unencumbered, solid property recovery system and may provide legal assistance, in accordance with their domestic law, by way of preventive freezing, seizure or subsequent confiscation. This article also provides that States Parties shall take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to give effect to an order of confiscation issued by a court of another State Party; to permit its competent authorities to order the confiscation of such property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering or such other offences as may be within its jurisdiction or by other procedures authorized under its domestic law.

Article 55 establishes obligations for supporting international cooperation as permitted by a State Party's domestic legal system, either by recognizing and giving effect to a foreign confiscation order or submitting a request to its competent authorities for the purpose of obtaining a domestic confiscation order on the basis of information provided by another State.

Article 56 refers to international cooperation without prior requests for information from another State Party, and introduces the concept of spontaneous cooperation, encouraging States to actively report to other States Parties if they consider that the disclosure of such information might assist in initiating or carrying out investigations or judicial proceedings and possibly recovering property.

As described hereinabove, Chilean legislation has a provision for providing international cooperation and regulations for carrying out confiscations. Article 157 of the Code of Criminal Procedure establishes the real precautionary measures applicable in Chile. Precautionary measures may be issued during the investigation stage upon request by the Public Prosecutor's Office to the Guarantee Judge. They may be as follows: property seizure, naming of an intervenor, property embargo or the prohibition of entering into acts or contracts for property, etcetera. However, because confiscations are legally tied to criminal offences, it is not possible to grant legal assistance during the investigation stage because a guilty judgment is required from the requesting country in order to proceed. Therefore, when the foreign country has issued a final verdict, that ruling may be applied pursuant to Article 13, last paragraph of the Code of Criminal Procedure, which establishes that "the execution of foreign criminal judgments shall be subject to that which is provided for under international treaties ratified by Chile and in effect."

Additionally, Law 20,000 governing the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances provides that confiscation is an accessory penalty to the main imprisonment sentence. Article 47 facilitates international cooperation, providing that the Public Prosecutor's Office, directly and without being subject to that which is stipulated under paragraphs one and two of Article 76 of the Code of Civil Procedure (a process conducted by way of the Supreme Court of Justice and the Ministry of Foreign Affairs), shall request and grant international cooperation and legal assistance intended to ensure the success of investigations into offences addressed under this law, pursuant to that which has been agreed to under international conventions or treaties, thereby being able to disclose specific information, even under circumstances provided for in the third paragraph of Article 182 of the Code of Criminal Procedure (proceedings secrecy).

To that end, the working group suggested enhancing regulations governing international cooperation in order to grant the State Party seeking for cooperation a wider scope over the type of actions it may take. Likewise, the group proposed publishing a guideline for international cooperation in both Spanish and English, explaining the steps that should be taken, and it also proposed legislation amendments explained in Article 53.

Article 53 of the UNCAC

This article refers to measures for direct recovery of property and provides that States Parties shall take measures as may be necessary to permit another State Party to initiate actions in local courts as the claimant to recover property acquired through the commission of acts of corruption (recovery), perform confiscations or as a victim for the purpose of restitution ordered by a court of law (compensation).

Concerning this subject, it is believed that there is a need to perfect the rules governing procedures applicable to property recovery. To this end the working group suggested that Article 16, paragraph 1, of the Civil Code be rewritten in order to comply with provisions set forth under the UNCAC:

Property located in Chile is subject to Chilean legislation, even when owners of said property are foreigners and do not reside in Chile, the latter shall apply without prejudice to that which is provided for under international treaties and agreed to under international contracts.

The working group also pointed out that Article 20 bis of the Code of Criminal Procedure should be amended as long as there is no law or agreement governing international cooperation, and therefore proposes the article be amended as follows:

“Procedures for Requests for International Assistance. Requests issued by competent authorities of a foreign country for proceedings to be conducted in Chile shall be submitted directly to the Public Prosecutor’s Office, which shall in turn request intervention by the guarantee judge assigned to the place where the proceedings shall take place, when the nature of the proceedings makes it necessary pursuant to Chilean legislation. Requests for international assistance issued by the Public Prosecutor’s Office shall be submitted directly to the Ministry of Foreign Affairs, without being subject to provisions set forth under Article 76 of the Code of Civil Procedure.”

In this manner, Article 20 bis of the Code of Criminal Procedure would be harmonized with Article 47 of Law 20,000 on the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which provides that the Public Prosecutor’s Office, directly and without being subject to that which is set forth under paragraph one and two of Article 76 of the Code of Civil Procedure, shall be able to request and grant international cooperation and assistance...” This regulation may also be applicable to money-laundering cases in which the underlying offence may be an act of corruption.

Finally, a proposal is submitted to enter into bilateral or multilateral cooperation agreements that describe the processes to be followed by States Parties when initiating civil actions listed under Article 53 of the UNCAC, so as to facilitate and speed up the procedures.

Although the working group agreed that Chile has appropriate financial disclosure systems for public officials pursuant to Article 57 and ensuing articles under Law 18,575 (Organic Constitutional Law of General Principles for State Administration) based on financial disclosure (Art. 60A), penalties established therein are lenient and these statements are not always checked for veracity. Concerning publication of these statements, several of them are posted on agency Web sites and available to the general public, in keeping with good practices. The CGR receives 10,333 statements of financial disclosure and 8,845 statements of disclosures of interests¹⁷, which it keeps on storage and for inquiries. As previously suggested in the Chapter II Report herein, transparency practices applicable to these statements must be enhanced by being more precise in terms of what information must be disclosed on the forms and by increasing penalties for non-compliance with these regulations; a list of public officials who do not comply with this requirement should be made public and there should also be a system to verify and monitor information disclosed within. In spite of all of the above, the working group praised the bill currently before the National Congress granting the CGR oversight authority on information disclosed under the statements in question.

Concerning international cooperation, there was a general consensus that this requirement is met in Chile, since the Public Prosecutor's Office's Special Unit for International Cooperation and Extraditions processes these requests pursuant to that which is set forth under Article 20 bis of the Code of Criminal Procedure. An explanation was provided as to how international treaties, over time, have incorporated this indispensable regulation making cooperation operative and making it binding for States to give access to background information, evidence and other specific material involved in proceedings, for example, in Latin American countries, however, there are regional constraints resulting from jurisdictional issues or sovereignty matters, whereas in Europe cooperation is more forthcoming, giving way to planning and coordination on investigations and cooperation activities, which only further highlights the need to make additional progress on this matter in our region. Statistically speaking, the Public Prosecutor's Office receives approximately 700 international criminal requests annually. Twenty-three percent of requests issued by Chile are for crimes of corruption (bribery and public funds embezzlement).

The Public Prosecutor's Office has also received requests for assistance from 28 countries, including Peru, Argentina, United States and Russia. Assistance requested generally refers to verification of criminal records, lifting of banking secrecy and other proceedings, such as taking sworn statements, subpoenas and disclosure of other records. Technology has also facilitated international cooperation since some proceedings today actually take place over international video conferences. On this same matter, the Judiciary channels international cooperation requirements through a network, while also taking advantage of video conferencing equipment for certain proceedings involved in oral trials, such as taking witness statements. The working group concluded that although it is generally agreed that Chile does meet requirements established under this article, there is one specific regulation governing requests for international assistance (Article 20 bis of the Code of Criminal Procedure which grants authority to the guarantee judge assigned to the place where proceedings are conducted) that somehow restricts the efficacy of the legal provision. In practice, the system has faced challenges regarding authority and deadlines, opening up a window of opportunity for the property acquired through the commission of acts of corruption to change hands, thereby preventing confiscation. The CDE provided a process that might be employed as a good practice in these cases, to wit, sending arrest warrants and requests for seizures at the same time in order to prevent property from being transferred to third parties.

Article 52 of the UNCAC

This article refers to the prevention and detection of transfers of proceeds of crime and is related to Article 14 of the UNCAC. Included among the anti-corruption policies and practices that must exist in member countries are the following measures applicable to financial institutions to verify the identity of customers; take reasonable steps to determine the identity of beneficial owners of funds deposited into high-value accounts; keep lists of Publicly Exposed Persons (local and foreign) and their family members and close collaborators; issue advisories regarding the subject that are not affiliated with a regulated financial group; share and disclose information on the financial interests and net worth of public officials, etcetera.

Concerning this article, Chile has adopted the necessary anti-corruption measures to be in compliance and performs practically all verifications cited therein. The UAF coordinates the National System for the Prevention of Money-Laundering and Terrorism Financing in conjunction with a broad spectrum of public and private institutions, to wit: the Central Bank, Ministry of the Interior, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Internal Tax Service, Offices of the Superintendents of Banks and Financial Institutions, Securities and Insurance, Casinos and Pensions, National Customs Agency, and the National Agency for the Prevention and Rehabilitation of Drug and Alcohol Use (SENDA), and the 34 economic sectors made up by companies and individuals bound by law to report to the Financial Analysis Unit. The Public Prosecutor's Office, in turn, performs prosecutorial functions, and the Judiciary issues rulings and corresponding penalties.

The UAF has a register containing the names of over 4,116 natural and juridical persons who are bound by law to set up money-laundering and terrorism financing prevention systems; likewise, they must report to the UAF any suspicious transaction detected while performing their duties. The UAF performs financial intelligence analysis on the suspicious transaction reports it receives, and forwards the file to the Public Prosecutor's Office when evidence of a crime exists. In 2011, the UAF sent 150 Reports of Suspicious Transactions (ROS) to the Public Prosecutor's Office.

The working group believes that Law 20,393 on the Criminal Responsibility of Legal Persons makes up for certain legal gaps pertaining to bribery and money-laundering. Published in December 2009, this law is relatively new; yet, two companies and three universities have already been brought up on bribery charges since then. Moreover, an agreement was reached with a company for US\$2 million in reparations.

On 3 December 2012, the UAF published Bulletin 49 that stipulates the obligations of passive subjects (suspicious transaction report, cash operations report, creating and maintaining registers, due diligence, and customer knowledge) and refers to regulations governing the fight against acts of corruption committed by senior Chilean and foreign public officials, therein defined as "Chileans or foreigners who perform or who have performed prominent public functions in a country, for up until at least one year after having ceased to exercise said functions;" The purpose of the register of transactions and Politically Exposed Persons (PEP) is to prevent and detect money-laundering acts resulting from possibly corrupt conduct. Agencies under UAF supervision must implement and execute their "due diligence" and gather knowledge on their clients while also setting up appropriate risk management systems to determine whether a prospective customer or final beneficiary is or is not a PEP or has become a PEP over the course of a prior business relationship; take reasonable measures to define the source of wealth, the source of funds belonging to customers and real beneficiaries identified as PEPs and the reason for the transaction; set up and follow continuous due diligence procedures and measures for commercial relationships entered into with a PEP; and record and report any suspicious transactions whatsoever with any PEP.

Chapter V of the UNCAC

This chapter addresses the recovery and restitution of assets confiscated as a result of corruption-related crimes. Chapter II (Prevention) and Chapter IV (International Cooperation) of the UNCAC are both related to Chapter V, which provides detailed provisions and more concrete measures applicable to recovering assets originating from acts of corruption, and emphasizes the importance afforded by the private sector and financial institutions on these matters.

Chapter V describes procedures and conditions that must exist in the States Parties, including the facilitation of civil and administrative actions; acknowledgement of foreign confiscation orders and the adoption of measures taken on the basis of said orders; restitution of property to requesting countries, returning property to legitimate owners and compensation for victims.

It is essential to stress that the UNCAC amends the former principle that provided that the proceeds of a crime belong to the State that had confiscated them. Instead, the UNCAC promotes the restitution of property while also providing that restitution should be shared with the State that participated in the confiscation. Provisions provided under this Chapter often call for drafting new legislation and setting up an institutional structure to conduct confiscations, and administrative confiscated property and its subsequent restitution.

The following sections consist of a review of the articles contained in Chapter V under discussion and the main binding and elective principals that shall be implemented by States Parties, in addition to the assessment and proposals submitted by the working group.

Article 51 of the UNCAC

Article 51 of the UNCAC states that the return of assets is a fundamental principle of the Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard since kleptocratic practices affect all public policies, including those related to peace and security, economic growth, education, health care and the environment. This article states that the return of assets is a primordial rule of the Convention; therefore, any question as to the interpretation of asset restitution shall be resolved in favour of said restitution.

Concerning this article, Chile has been willing to cooperate internationally with other countries. In practical terms, Chile has collaborated primarily on drug trafficking, money-laundering and fraud cases, and does not have any experience with corruption cases. However, the working group concluded on the basis of the Chapter V assessment that there are some legal gaps, primarily when it comes to returning assets obtained from acts of corruption to the country from which they were stolen. An analysis of the latter is contained in the paragraphs below.

Guarantee Courts have authority over some matters related to Chapter V herein, such as issuing precautionary measures, granting prior approval to prosecutors' proceedings, and ruling over the destination of confiscated items. Oral Criminal Tribunals, however, hand down sentences and issue rulings to confiscate sequestered items.

Financial Analysis Unit (UAF)

The UAF is a decentralized body connected to the President of the Republic through the Ministry of Finance. Its mission is to prevent and block use of the financial system and other areas of the economy for committing money-laundering (ML) and terrorism financing (TF) crimes. The UAF exercises its preventive role by issuing instructions, disseminating warning signals, training subjects bound to report suspicious ML or TF transaction to authorities, overseeing compliance with the regulations it issues and use of financial intelligence. In the event there are signs of ML or TF, the Unit forwards the case file to the Public Prosecutor's Office. The UAF has authority to submit to a judge on the respective Court of Appeals requests for lifting the banking secrecy.

Public Prosecutor's Office (PP)

The Public Prosecutor's Office is a constitutionally autonomous body, exclusively in charge of leading investigations of events constituting crimes. This service adopts measures to protect victims and witnesses, stores under custody all items confiscated or seized during investigations; and takes necessary measures to prevent them from being altered in any way. When items seized during investigations into drug-related and money-laundering offences are industrial or commercial establishments, sown fields, farms or orchards, in general, the guarantee judge, upon request by the PP, may designate a provisional administrator who will be accountable to the Public Prosecutor's Office. This service is also the competent authority designated to receive requests for international legal assistance, and may subsequently request intervention by a guarantee judge assigned to the place where requested proceedings are to be conducted if they impinge upon the constitutional rights of the accused.

Role of Public Institutions in Chile in Asset Recovery

State Defence Council (CDE)

The CDE is a decentralized public agency under direct supervision of the President of the Republic. The CDE legally defends and represents the State, taking criminal and civil actions concerning deeds and acts that could economically jeopardize the State. It was proposed during the discussion groups that the CDE take on the role of representing the State in executing sentences for confiscated real-estate property registered in the State's name for subsequent sale in public auctions by the General Directorate of Collateral Loans (DICREP).

Office of the Comptroller General of the Republic (CGR)

The CGR is a higher oversight body of the State Administration with constitutional autonomy. It is essentially a control body safeguarding the legality of acts committed by the State Administration; it scrutinizes the collection and expenditure of government funds by the State, municipalities, public welfare, and other state services as determined by law; approves and rejects revenue and investment accounts; and manages the Nation's General Accounting. It performs its accounting duties indirectly, however, by way of the Court of Accounts or the ordinary courts handling complaints, which are referred to the criminal justice when there are grounds to do so. It does not have an international role in these matters.

General Directorate of Collateral Loans (DICREP)

The General Directorate of Collateral Loans is an auxiliary body of the justice system in charge of auctioning, custodial or destroying items confiscated by the courts.

Introduction to Chapter V

The World Bank has estimated the cost of corruption as equal to five percent of the annual World Gross Domestic Product. Accordingly, there must be a concerted, global effort to fight against this phenomenon, yet this is no easy task. Proceeds of corruption are transferred across countries, getting lost between organizations that “lend names” and “shell” companies that carry out hundreds of financial transactions and operations under a legitimate facade, preventing them from being traced. This is why international cooperation among countries is vital. Requesting information, aiding in investigations, finding and recovering assets, etcetera, are just some of the reasons why international cooperation is so crucial in the quest to secure guilty verdicts for perpetrators of this sort of illicit activity and confiscate the proceeds.

The United Nations Convention Against Corruption places emphasis on the importance of recovering assets obtained through corruption and returning them to the country from which they were stolen, insofar as it constitutes a powerful deterrent by eradicating the key incentive to corruption, disposing perpetrators of their assets and instruments they use to commit criminal acts, promoting the handing out of justice, and compensating for damage caused to victims and populations, thereby contributing to countries’ development.

For the first time ever, Chapter V of the UNCAC provides a more comprehensive and innovative framework for assets recovery and restitution. Despite these achievements, the road ahead in its implementation remains long and States Parties must develop and undertake endeavours that truly involve broad-based international cooperation and aid. A recent study published by the Stolen Asset Recovery Initiative (StARI)¹³, including a review measuring the progress of countries in meeting their Aid for Development Effectiveness¹⁴ commitments adopted in 2008, revealed that only four OECD countries (Organization for Economic Cooperation and Development) (Australia, Switzerland, United Kingdom and United States) repatriated US\$222 million to foreign countries victimized by corruption from 2006 to 2009, while France and Luxembourg did their part by freezing US\$1.2 billion. The aforementioned study pointed out the need to draft a follow-up plan so countries will take concrete assets-recovery measures, since 80 per cent of donor countries have not made any progress on the matter (OECD-StAR, 2011). Moreover, assets recovery is not just a public sector responsibility. It requires support from financial institutions to verify the identity of their clients and end beneficiaries, in addition to reporting suspicious operations to respective agencies.

Some of the obstacles hindering assets recovery include anonymous transactions, a lack of technical expertise and resources, a lack of standardized regulations and procedures, poor cooperation and the fact that offenders must have a prior sentence as a prerequisite for recovery.¹⁵ Leadership, collaboration among all entities involved and clearly defined results-based responsibilities are of paramount importance to an effective asset recovery process. Some countries have resolved these concerns by setting up inter-institutional teams on a case-by-case basis or as standing organizations devoted to asset recovery operations.¹⁶

13 In 2007, the World Bank and the UNODC jointly launched a program entitled the Stolen Asset Recovery Initiative (StARI), which was key in promoting the ratification and implementation of Chapter V of the UNCAC. Currently, StAR serves as an aid to countries victimized by corruption, helping them recover assets.

14 On this occasion an action agenda was adopted setting forth a commitment for countries to fight against corruption and track down and recover stolen assets. The report was prepared for the Fourth High-Level Forum on Aid Effectiveness held in Busan, South Korea in November 2011.

15 The World Bank and the UNODC, 2009

16 Idem, previous footnote.

CHAPTER V



Chapter II Conclusions

Since publication in 2009 of a part of the laws making up the so-called Probity Agenda, institutions and processes within the Administration have been refined in favour of transparency, probity and the fight against corruption in Chile. In spite of the latter, it is still necessary to bolster certain areas in need of new regulatory frameworks. Some of these areas are addressed under several bills currently before Congress, including: a bill to govern lobbying and a public registry of international standards; regulation and transparency of political party and campaign funding; regulation of conflicts of interest and conflicts arising before or after employment in the government or private sector; strengthening civil service and overseeing and verifying statements of net worth and interests, among other issues addressed at working groups held throughout the project.

Along these same lines, it is also considered necessary to conduct a study on the application of current legislation and systematization of bills compared to international model legislation, and submit the study to the respective parliamentary committees currently considering the bills to strengthen legislation.

As stated herein, several of the areas calling for reinforcement in order to make progress in compliance with the UNCAC may be addressed by developing good practices in the government, private and non-profit sectors. In fact, some of these good practices were identified during the project and published on the Web site. A fitting example of the latter is the good practice applicable to the implementation of integrity or compliance systems within government, public and civil society organizations, including, for example, dissemination campaigns and training strategies to promote a culture of ethical practices among members of these organizations. Those systems must include mechanisms to allow members to lodge complaints and provide protection to whistleblowers.

A resonating lesson learned from the entire process undertaken refers to the need to continue implementing public policies that encourage citizen control and participation in anti-corruption affairs and promote the study of civics in grade school and up, in conjunction with greater dissemination.

Finally, on a more organizational note, we believe it is essential that the public-private network—founded for the purpose of carrying out this project—continue in operation and allow its members to continue interacting. This calls for an agency that would coordinate or lead the network.

Article 14 of the UNCAC

Article 14 of the UNCAC is dedicated to combating money-laundering, thereby providing measures that seek to prevent these activities. This article aims to ensure collaboration with financial entities and other related institutions to prevent funds originating from corruption from entering the financial system. This article address implementation of regulatory and transparency measures in the banking system, as well as cooperation among government institutions and the States in money-laundering related cases.

During the mixed working group emphasis was placed on regulations in existence in Chile to prevent and investigate money-laundering crimes.

Even though Chile is not impervious to money-laundering, there is seemingly little information on this crime. For instance, the private sector tends to believe that it is an unlikely victim of money-laundering or terrorism funding, and this perception has held back implementation of prevention systems or compliance with provisions established under Law 20,393.

Moreover, the group highlight the coordination of the Financial Analysis Unit (UAF) with subjects who are bound by the open-door and continuous dissemination policy to report suspicious transactions. There was also mention of an UAF project implemented with support from the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNDOC) with a view to train subjects bound or regulated by law.

Concerning Politically Exposed Persons (PEP), the discussion emphasised the need to have a record with the minimum posts that are to apply under that regime.

During the mixed working groups deliberations a point of contention arose between the private sector and organized civil society concerning the lifting of banking secrecy because the bill currently under consideration confers greater power to the UAF to request information from banks. It is quite challenging to make progress in the prevention of money-laundering while also ensuring that the prosecutorial and judicial systems continue to operate since, according to statistics, there has been a steady increase in Chile in the number of sentences and confiscations, revealing the need to have improved preventive mechanisms, sustain public/private sector coordination, fine tune intelligence analysts to provide prosecutors with quality information, and apply the regulatory and legal changes necessary to reinforce the UAF.

Article 13 of the UNCAC

The UNCAC states that active participation of society is necessary to effectively fight against corruption, calling for States Parties to take appropriate measures to promote the participation of civil society, non-governmental organizations and community-based organizations. Article 13 provides that States shall enhance the existing transparency in the government; promote the real participation of the public in decision-making processes; and ensure and protect citizens' rights to seek, receive, publish and disseminate information concerning corruption. In addition, States shall undertake public information activities that contribute to the non-tolerance of corruption, as well as public education programs, including school and university curricula.

In the mixed working group the progress made by the Partnership for Open Government was underscored, given the successful discussion groups held with participation by social organizations within the working plan defined by the Executive.

Concerning citizen participation, group members also mentioned the importance of actually implementing the Participation Law and having clear mechanisms to involve society in public policy debates.

Once again, one of the most talked about issues was the noteworthy headway made under the Transparency Law and the creation of the Council for Transparency, in addition to activities held by the Council to enhance access to information and develop more transparent governmental practices.

Concerning whistle blower protection, the group specified that the "Comptroller and Citizens" Web site requests that whistle blowers identify themselves, without prejudice to identify confidentiality and protection. Also, audit suggestions may be submitted to the Web site anonymously.

There was also an agreement among members to work on an awareness campaign aimed at children¹² while concurrently fostering the inclusion of good citizen practices in education programs. Bearing in mind that society's know-how in citizen participation and control is relatively recent, it would be appropriate to reinforce this experience through education programs. Finally, a proposal was submitted to launch a long-term education campaign as part of this project.

12 A play regarding transparency and citizen participation was presented in six schools and in the Children's Museum Mirador. A promotional of the play available in the following link: <http://www.youtube.com/watch?v=TJ6rBGOrFo>

As far as conflicts of interest are concerned, certain positions are being added to regulations governing disclosures of assets, which are in fact verified in great detail in order to ensure that information contained therein is accurate and up-to-date.

Judicial appointments are regulated quite well under a rigorous scheme. In the event of concerns regarding procedures, the Internal Controller orders an administrative hearing and appoints a prosecutor and an actuary to conduct the investigation. Penalties are applied pursuant to regulations, and when a crime is committed the case is referred to the prosecution service.

In the battle against corruption, the Judiciary conducts external audits on its financial statements, in addition to taking physical inventories, which are then compared to theoretical inventories.

Article 12 of the UNCAC

Regarding corruption prevention measures in the private sector, the UNCAC encourages States Parties to play a leading role by way of adopting measures to enhance accounting and auditing standards in the private sector, and provide effective civil, administrative or criminal penalties where appropriate. States Parties shall promote the development of standards and procedures designed to prevent corruption, such as codes of conduct and good commercial practices. Likewise, they shall promote guidelines designed to prevent conflicts of interest, detect them when they arise, and discern between admissible and inadmissible procedures in those cases.

The mixed working group agreed on the need to institute transparency and integrity practices in the private sector, stating that self-regulation practices such as codes of ethics and compliance systems are not enough to prevent corruption, therefore necessitating both support and guidance from the government and its oversight bodies to ensure real compliance and foster good practices. It was suggested, for example, that tender ruling indicators include some references to integrity, thereby rewarding companies that have properly working compliance systems with a higher score over those that do not have such a system.

Moreover, it was shown that there are different levels of compliance with the Criminal Liability of Legal Entities Law since it contains some provisions that are more easily met by large companies. Accordingly, measures must be taken to urge smaller companies to implement compliance systems, to which end the group proposed raising national and international funds in an attempt to institute these integrity practices in SMEs.

The government and private sector working group agreed that Law 20,393 (Criminal Liability of Legal Entities Law) represents progress; nonetheless, the list of crimes included under the law must be expanded and its practical application assessed. It was also pointed out that the Office of the Superintendent of Securities and Insurance does not have the authority to oversee prevention models or certifying companies. Instead, its purview is limited to registering certifying companies, resulting in a wide gap in oversight.

Working groups agreed that implementation of these models does not have to clash with workers' rights and there are international examples demonstrating it.

collaboration.

There have been, though, significant improvements in information technology and access which have strengthened interconnections and the exchange of information between police departments and prosecutor offices, thereby facilitating

The assessment also highlights the importance of amending legislation stipulating that some documents must be submitted in hard copy. These cannot be presented digitalized and as a result creates a bottleneck in the system.

required to provide information, however lack of technology makes progress in this direction a challenge. have all the information while also safeguarding individuals' privacy. Although, in practice the goal is to shorten the time automatically delete it. The judiciary is currently addressing this matter in order to strike a balance between the right to of trials there is a great deal of private information involved and, at present, there are not any systems available that can concern expressed about the conflict between the right to total transparency and respect for privacy, because in the case information publication standards given the difficulties the general population has accessing information. There was also information requested and has fulfilled its mission thus far. The assessment emphasized the need to improve certain process Concerning access to public information, a Transparency Committee was set up to facilitate access to and process

Purchasing System, moving one step closer to transparency and corruption prevention. Judiciary is a branch of the government, and, as such, constitutionally independent, it chose to participate in the Public The assessment praised the active transparency policy developed by the Judiciary, and pointed out that although the

This article provides that each State Party shall take measures to strengthen integrity and to prevent corruption among members of the judiciary and the prosecution service in those States Parties where it does not form part of the judiciary, but enjoys independence similar to that of the judicial service. Proposals herein include regulatory standards applicable to appointments and conduct of officials and members, in addition to accountability mechanisms. Functional constraints are also included in cases where members of the judiciary enjoy immunity, to prevent said immunity from lasting indefinitely.

Article 11 of the UNCAC

The mixed working group disagreed on the divergent interpretations of "public information." "Organized civil society claimed that this right must be enshrined in the Constitution, so that it would not be subject to legal interpretation; whereas Executive Power representatives pointed out the need to reconcile the right to access information with the right to privacy, concluding that the current legal framework is sufficient.

As far as the need to apply new transparency standards is concerned, government institutions are encouraged to follow them as they would good practices, and add active publication of the most requested information, thereby facilitating access to citizens' demands and optimizing internal resources.

Another problematic area is public records management and storage, highlighting the need to issue a public policy addressing the matter. One of the proposals submitted by the mixed working group entailed eliminating "missing file" or "not found in data base" as grounds for denying access to public records; however, until there are laws governing this area, institutions must uphold the good practice of having the necessary tools to facilitate access to information.

The private sector made it clear that appropriate information on proposal criteria must be provided, the Direction of Public Procurement (*ChileCompra*) pointed out that close to 90 per cent of all technical tender rulings are made public, yet when they are not, it is because the institution expressly requests that they remain confidential. Furthermore, group members pointed out that for all public tenders exceeding 1,000 UTM's an appraisal committee made up of government and private officials takes part in the process. Additionally, anyone can access data uploaded to the Analiza.cl platform. This group emphasized that when a potential irregularity is identified in the Public Purchasing System one can turn to the Public Hiring Tribunal. What's more, there is a Web platform where claims are remitted directly to the head of services and the most serious ones are sent to the Regional Office of the Comptroller General for processing.

Participants discussed how the system would be more robust if people in the evaluation committee were made to sign a confidentiality agreement in addition to a verifiable statement of interests as a means to prevent acts of corruption. Because there are much more publicly available data in this field, citizen control must be encouraged as a way to inspect and supervise tender rulings, awarding, and other key steps in the bidding process.

Article 10 of the UNCAC

Article 10 provides that States Parties shall take measures to enhance transparency in their public administration. In order to comply with this requirement, they must publicly report on the organization, functioning and decision-making process of their public administration and, with due regard for the protection of privacy of persons involved, appropriately inform the general public on decisions and legal acts. States must facilitate public access to information, seeking mechanisms to simplify the content published.

Members of the mixed working group agreed that Chile does have regulations and measures that contribute to the transparency of public administration. Under the Chilean model, the right to access public information is enshrined in Article 8 of the Constitution and Law 20,285. The Chilean Council for Transparency is the guarantor body that decides whether information must be provided in response to a claim and applies penalties to parties unwilling to hand over information deemed public. Nonetheless, critics complain that this guarantee only applies to the Executive and not the Legislature or Judiciary because these two branches of government have their own claim-processing bodies.

One of the problems identified was the lack of uniform compliance with standards by the various government bodies. The central government's degree of compliance hovers around 96 per cent while, on average, the municipal government compliance level is less than 30 per cent. There is also a great deal of asymmetry at the municipal level since some local governments boast a high level of regulatory compliance contrary to others that do not even have a Web site. With a view to solving these information asymmetries, 50 municipal governments are working on administrative models to produce tools and strengthen their capacity to boost compliance levels with the support of the Council for Transparency.

Moreover, as an effort to close the gap between the various public agencies, the government is working on the Chilean Government's Transparency Portal¹¹, providing an easily-accessible and efficient place to request information relative to State institutions. Also, Congress, the Judicial Power and the Office of the Comptroller General of the Republic signed an agreement with the Council of Transparency to participate in this initiative.

when an indictment has not been issued, so that informants will trust that the cases are actually investigated. Unless the aforementioned changes are implemented, it will be difficult to encourage whistleblowers to speak out, much less provide them protection.

Members of the private sector working group and civil society tabled a proposal to design and implement an awareness campaign to promote citizen participation and social control, while continuing to reward individuals for following best practices (those that are truly followed in practice and not just on paper) throughout the entire government sector, including public officials, with a view to acknowledging, spreading and encouraging these practices.

The mixed working group proposed the need for ongoing, permanent coordination of all government sectors in order to better publicize pro-transparency or pro-probity actions taken, while simultaneously creating joint initiatives, because it is common knowledge that exercises such as the one carried out within the scope of this process will set the stage for a comprehensive vision and approach on this matter. Group members also argued for the need to encourage dissemination of all actions taken in these areas since the population at large is not abreast of the goings on. They suggested creating a Web site as a venue to post this information.

Moreover, organized civil society appealed to the legislature to take part in the working groups underway with a view to enriching the debate and furthering citizen participation.

Article 9 of the UNCAC

States shall take appropriate measures to promote transparency and accountability in the management of public finances. To this end, the awarding of public contracts must include clear, well-defined award criteria and tendering rules. Similar standards must also be applied to the signing of contracts and tenders procedures, establishing, in advance, conditions for participation, including selection and award criteria and tendering rules, and their publication. The article provides for the need to have an internal account system, and effective management, auditing and control mechanisms. When appropriate, it is necessary to take corrective actions in the case of failure to comply with these requirements.

In its assessment, the mixed working group emphasized Chile's public purchasing process, stating that Chile has sound legislation in this realm providing for transparent acquisitions and tenders and the ability to conduct online monitoring. The public purchasing system contributes to corruption prevention, and provides a mechanism to investigate and control operations performed by public officials.

The system, however, remains vulnerable, with the human factor as one of its weakest links. As a corrective measure, administrative and technical employees are undergoing training to gain accreditation in operational and legal aspects of the system. Accreditation is valid for two years and includes probity-related issues. One of the desired outcomes of this program is to prevent tendering rules from being tailor-made to the needs of certain suppliers and the reputation of tendering rules used previously in the past. This will supposedly encourage companies to actually compete with each other to submit the best bid to the State.

Finally, the group pointed out that implementation of the politically exposed persons list (PEP) in Chile was spearheaded by the Financial Analysis Unit in conjunction with the Office of the Superintendent of Banks and Financial Institutions. The creation and use of the list is mandatory for banks and other institutions. Stakeholders also remarked on how it constitutes a stepping stone in the implementation of Know Your Customer procedures, which according to comparative experience, have proven to be a remarkable anti-corruption measure.

Article 8 of the UNCAC

This article promotes integrity, honesty and responsibility among public officials by way of codes and standards. It also provides for the implementation of measures and systems to facilitate the reporting by public officials of acts of corruption, when such acts come to their notice in the performance of their functions, and taking disciplinary or other measures against public officials who violate the rules established.

There was agreement among members of the mixed working group that although there are policies and regulations in place to foster integrity, honesty and responsibility among public officials in the performance of their functions, they are often lacking in clarity, relevance and consistency, thus rendering it difficult for them to be understood and applied in practice. Members mentioned that certain mandatory procedures applicable to public officials under circumstances governed by the Probity Law and other similar laws are not very clear, e.g., procedures for disclosing conflicts of interests or lodging complaints. One of the proposals tabled entails compiling a guide of the sundry regulations governing probity in a user-friendly Code of Conduct for public officials, including examples of good and bad practices. They discussed the possibility of making this guide available online for consultation, with a view to fostering corruption prevention. Along these same lines, members discussed the need to provide induction or training to prepare public officials on how to handle situations in which transparency and probity are jeopardized, in conjunction with an annual exam testing their knowledge in this area.

Although Chile does have a whistleblower protection law (*Ley de Protección al Denunciante*), it is quite inadequate and would fall short when it comes to encouraging disclosure and protecting whistleblowers. It would neither cover all public officials nor would it meet international standards for whistleblower protection laws. Furthermore, several contradictions were identified in the system, for example, at the municipal level complaints must be submitted to the Mayor, resulting in insufficient guarantees for public officials lodging complaints. The group also discussed the possibility of having an anonymous complaint system, airing both the pros and cons of this type of system without reaching a consensus. Group members did agree, however, that more protection should be afforded to informants before cases become criminal matters, at which point whistleblowers may request that their identity remain confidential. Moreover, legislation should also guarantee protection for private informants.

The group agreed on the need to correct disparities in protection provided to public officials¹⁰ turned whistleblowers, since said protection is only afforded to full-time government (*de planta*) sector employees and does not extend to all civil servants in the government sector. Likewise, once the investigation is complete, informants should be notified

¹⁰ There are three types of contracts in Chile: *planta* system is predominantly career based and is full-time and permanent, *contrata* system for one-year contracts, which can be renewed an unlimited, and honorarios system that can be a contract for a few months or a year. The whistleblower protection covers the *planta* system.

the Comptroller General⁹, containing a special form and the most recent financial and interests disclosure, and also, providing information on the new roles in the private sector of the former civil servants; the system would subsequently verify uploaded data against individual tax returns, while also provide for penalties for misrepresentation of information, e.g., temporarily banning private offenders from holding public office or corporate offenders from participating in public tenders. Concerning newly-appointed civil servants crossing over from the private sector, their statements of net worth and interests (including previous employment) may be cross-referenced in order to expose any real, apparent or potential conflicts of interests. In conclusion, these types of tools and processes—that are designed to expose and handle conflicts of interests—are fundamental in preventing corruption and furthering society's trust in civil service.

With a view to building a culture of transparency and accountability among civil service agencies, the group suggested applying transparency and accountability indicators/criteria to individuals appointed under the System of High-Level Public Office (SADP), and tying them to contracts and performance agreements.

Regarding political funding, the group came to the conclusion that legislation is weak and not very transparent, also citing a lack of political party oversight, which necessitates enhancing regulations and oversight activities applicable to the funding of candidates to prevent the misuse of public funds and excessive electoral spending, as evidenced in studies conducted in Chile. It is therefore necessary to arrive at greater transparency in political funding, particularly of candidates. The group also proposed establishing that funding be transparent, public and only for natural persons, with caps on donations to prevent nepotism.

It was also considered necessary to further refine the Constitutional Organic Law governing the Election Agency so that the agency may become an active, robust and autonomous supervisory body with resources to revamp its technology, conduct exhaustive inspections and apply penalties as required.

In terms of conflicts of interest, there has to be a clear definition of what they are and what they imply, and this definition should be made known through a manual and training. Transparency-related practices governing financial and interests statements disclosure must also be enhanced by requiring more rigorous data on forms, stepping up penalties for non-compliance with this regulation, and publishing a list of non-compliant civil servants. Civil society recognized that the financial and interest statements disclosure do constitute a good tool; however, they must be published in a format that can be processed to allow for subsequent oversight and social control. The latter would also facilitate verification of their content by allowing for several databases to be cross referenced while also serving as an automatic early warning tool. Furthermore, this mixed working group highlighted the need to make it mandatory for individuals in public office to submit their statements prior to taking office, while also making an exit statement a mandatory condition for receiving their final pay.

Civil society believes that regulations governing parliamentarians are ripe with shortcomings given that their tendency to self-regulate undermines legislation applicable to them, which in and of itself is a conflict of interest. For instance, penalties applicable to financial and interest statements disclosure or passive transparency as enshrined under the Transparency Law are lighter for parliamentarians or even inapplicable to them.

9 Since the Office of the Comptroller General would be responsible for verifying the accuracy of financial and interests disclosure according to the Probity Bill, it would stand to reason that it would also keep post-employment records of public officials.

Civil society proposed conducting a review on the integration and independence of the ethics and transparency commissions of both houses of the Chilean National Congress, citing as an example, a parliamentary committee whose members are chosen independently, who are neither senators nor house representatives currently in office—given the conflicts of interests this would entail—and who would enjoy enough autonomy:⁸

Article 7 of the UNCAC

This article provides that the States Parties shall adopt, maintain and strengthen systems for the recruitment, hiring, retention, promotion and retirement of civil servants and, where appropriate, other non-elected public officials, the systems should be based on merit, equity and aptitude; and that include adequate procedures for the selection and training of individuals for public positions considered especially vulnerable to corruption, and the rotation of this positions where appropriate, of such individuals to other positions. It furthers declares that the States Parties shall consider adopting measures aimed at prescribing criteria concerning candidature for and election to public office; shall take measures to enhance transparency in the funding of candidature for elected public office and political parties; shall adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest; and oversee and articulate the measures adopted.

The mixed working group pointed out that although there are regulations designed to foster transparency in the systems for the recruitment, hiring and retention, etc., there is not full compliance with these regulations. It was therefore suggested that standardized and transparent criteria be designed.

Moreover, they agreed on the need to include other services (municipalities, programs to manage public funds, etc.) within the System of High-Level Public Office (SADP).

They discussed that although the SADP needs improvement, if well utilized it can guarantee that when individuals meet their employment goals effectively, they will not be let go or requested to retire due to administration changes. Furthermore, it is necessary to have greater transparency regarding positions for which applicants are screened on the basis of “trust” and do away with unnecessary screening for other positions, with a view to fostering a merit-based career civil service system. Similarly, the group suggested that the “provisional or transitory nature” of the System of High Level Public Office be eliminated for positions of “trust” since it discourages other prospective applicants from applying because the individual holding the post transitorily is already thought to have earned the trust of his or her superior.

According to stakeholders, there is very little “revolving door” regulation in Chile between public services and private corporations and vice versa. The latter is only applicable to supervision and control civil servants (who cannot work for more than a six-month stretch in oversight entities); however, there is no evidence of this regulation actually being applied. Comparative studies have shown that post-employment constraints are designed to prevent conflicts of interest, undue influence, and the use of privileged and confidential information. The mixed working group proposed seeking mechanisms to counteract these practices, such as a post-government employment registry managed by the Office of

Article 6 of the UNCAC

This article provides for the creation or maintaining of an independent body or bodies, in charge of preventing corruption in accordance with the fundamental principles of the State Party's legal system. States Parties shall promote the participation of society and foster its awareness as to the existence of the anti-corruption entity or entities. Likewise, the body or bodies shall have the necessary material resources to conduct the training required by specialized staff in corruption prevention and fighting. Finally, the body or bodies shall oversee and coordinate the implementation of anti-corruption measures.

Both the public and private sector working groups acknowledged the existence of several anti-corruption bodies in Chile, however, they did not perceive any clear leadership in the field, as mentioned in the paragraph above. They remarked on the dearth of actions aimed at fostering citizen awareness in matter of transparency, probity and corruption prevention, in addition to citizens' limited knowledge on legislation, agencies involved and what steps to take when probity is violated. Moreover, the group cited several inter-government agency agreements in place to foster probity and transparency.⁷

Mention was also made of the project undertaken by the CGR entitled "Comptroller and Citizens," which is aimed at fostering citizen participation in administrative aspects related to the Comptroller's External Oversight Function by gathering and examining online complaints and audit suggestions. The number of complaints lodged on the Website created for this purpose has increased since the site was launched in September 2012, amounting to a total of 1,070 complaints and 200 audit suggestions as of April 2013.

Stakeholders in the mixed working group agreed on the need to reinforce civil servant training on probity and transparency, while also mentioning the letter of commitment that must be signed by all individuals working for the Executive branch, in keeping with responsibilities taken on by Chile under the Open Government Partnership (OGP). Despite the latter, civil society representatives argued that a signature is not proof enough of an understanding of the various regulations governing probity and transparency. Instead, they suggested the possibility of holding an annual exam to determine the real knowledge of civil servants—a practice employed by other countries and some companies. An additional proposal entailed creating a code of general principles, yet specific enough to include the sundry challenges a civil servant may encounter on the job and in any specific unit. One issue warranting further scrutiny is the possibility of making probity and transparency training mandatory for all individuals hired under a fee-based contract.

Group members suggested holding a public campaign on probity and transparency with a view to encouraging citizen participation and control. In addition to institutionalize citizen awareness/civics course on the national curriculum in order to disseminate knowledge on the rights to transparency and ethical behaviour.

7 Agreement between the Office of the General Comptroller and the National Prosecution Service Agreement-Some of the cooperation-related activities included under the Convention are: corruption training workshops for CGR staff members; creating a model format for receiving criminal complaints related to corruption; accessing public officials' statements of net worth and interests when requested by the National Prosecution Service, etc. The Agreement is available online at: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/ARC_150701_01

The mixed working group held in-depth discussions on the need to have a single anti-corruption organization, ultimately concluding that the latter is simply not feasible given the Chilean legal framework, the existence of sundry independent corruption prevention and fighting agencies and the varying roles each agency plays. As a result, civil society representatives proposed that one agency should take the lead in coordinating the lot in order to better harmonize actions taken by government institutions, private sector and civil society, citing as an example, setting up a committee similar to the one set up for this project, that would meet quarterly to exchange information and coordinate corruption-prevention activities. Stakeholders also agreed on the need to draw up a map of all anti-corruption institutions specifying the regulations, powers and duties of each body and their specific role in these matters.

Another issue discussed at great length was the need to implement a National Agenda on Probity—but not as a mere reaction to a specific crisis—underscoring the need for a long-term approach including municipal governments. This discussion also touched upon the important role citizens play in raising issues worthy of inclusion on the public agenda, while defining priorities and joint actions. Group members emphasized the need to broadly publicize the agenda so that all citizens may become familiar with it and actively involved.

There was also a dialogue of the need to promote civil servant induction and training programs in matters pertaining to transparency and probity, thereby systematizing standards for real learning that could be subject to review by way of annual exams.

The discussion included how citizen awareness is of paramount importance in preventing corruption, and, as such, greater support should be given to the Ministry of Education in its efforts to continue distributing material, created by the Chilean Chapter of Transparency International, Chile Transparente, to the 1,377 government-subsidized high schools in order to encourage and support Civics. Stakeholders suggested launching a short-term campaign highlighting the unethical behaviour of citizens in their daily lives, followed by an educational campaign aimed at children. A dissemination campaign, explained in greater detail in Annex 3, was launched as part of this overall process.

Finally, the UNCAC provides for the need to measure the outcome of preventive actions carried out. To this end, a proposal was put forth to develop hard indicators instead of perception based ones. Several institutions made a commitment to providing underlying data for this task. In spite of the above, during the discussion stakeholders remarked on the relevance of the human factor in the data entry involved in processing the numerous institutional forms, and, accordingly, it was suggested that in addition to developing indicators there should also be training on correct data collection techniques. Within the framework of this project, a working group made up of participants from the various other working groups proposed gathering statistics to follow up on implementation of the UNCAC and other international instruments. Annex 2 contains a description of these procedures.

Chapter II of the UNCAC

Article 5 of the UNCAC

Article 5 describes the activities related to preventive anti-corruption policies and practices that each State Party shall carry out, for example, States Parties shall develop and implement or maintain effective, coordinated anti-corruption policies that promote the participation of a large number of social sectors in anti-corruption activities; set up effective anti-corruption practices; evaluate relevant corruption fighting measures; and collaborate with each other and with relevant international and regional organizations.

Publication of the Freedom of Information Law in Chile, better known as the Transparency Law³ was highlighted by the public sector working group. Stakeholders agreed that the Transparency Law represents major progress for the country and that probity has been bolstered through greater transparency. The role of the Transparency Council, as an oversight body for the right to access public information, was also underscored; however, the fact that citizens are unfamiliar with the aforementioned Transparency Law is a drawback, which is why it is necessary to design a mechanism to make society familiar with the legislation, and appropriately understand its intended use and benefits.

The CGR, in turn, in its role as a preventive body, complies by overseeing the legality of administrative acts (personnel appointments, application of disciplinary measures, promotions, zoning laws, administrative tendering rules, etc.), issuing rulings and conducting audits.

Additional highlights include publication of the Procurement Law⁴, and the framework for the Collaboration Agreement with the CGR by way of which the online ChileCompra⁵ module was set up to receive complaints regarding overdue payments or possible irregularities in purchasing processes⁶. Likewise, the Public-Private Council for the Integrity of Public Market Suppliers was set up in December 2011 with a view to submitting draft actions to reinforce integrity practices among vendors doing business with the State.

Participants in the private sector working group broadly acknowledged efforts put forth by the Chilean State in recent years to promote transparency, namely the Transparency Law, yet also remarked on how treatment of anti-corruption and corruption-related issues on the public agenda is inconstant.

3 The Transparency Law (Law No. 20,285) went into effect on 20 April 2009, since the Law's transitional article stipulated that it must enter into force eight months after being published in the Official Gazette.

4 Law No. 19,886, Procurement Law, is available online at: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004&busca=19886>. In 2011, there were more than US\$8 billion of transactions conducted on the public market, nearly US\$2 billion of which were annual purchase orders issued by the 900 government agencies using this public purchasing system (Source: Public Purchasing Office).

5 ChileCompra is the Dirección de Compras y Contratación Públicas is the online compulsory procurement system of the Government of Chile. The link for the Probity in Public Purchasing Module is available online at: http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=444

6 Out of all complaints lodged (2,856) in the second quarter 2012, 52.56% (1,501) were related to potential irregularities while 47.44% (1,355) were related to overdue payments. Source: Chile Compra. Complaint-related information is available online at: www.analiza.cl.

CHAPTER II

Project

The “UNCAC Participatory and Representative Self-Assessment” project began in March 2012, framed within the program entitled “Strengthening Transparency and Probity in Public Administration in Chile through International Cooperation and Follow-up on the UNCAC,” which was also jointly conducted by the CGR and UNDP more than three years ago.

The project is intended to perform the first participatory review in Chile on compliance with Chapters II and V of the Convention. The first part of the project focused on conducting a review of Chapter II, including an assessment of where the country stands concerning corruption prevention, along with proposals to improve anti-corruption legislation and public policy in Chile. At the same time, and with a view to progressing at a quicker pace, several good practices were identified for use on the actual project itself, such as online publication of authorities’ agenda with detailed information on meetings (participants, companies/institutions and reasons for holding meetings). The same methodology was employed for the Chapter V review with a similar outcome.

The process is considered innovative because of its participatory approach, in which stakeholders from the public sector, private sector and organized civil society had the opportunity to speak their minds and submit proposals during eleven working group discussions (for a total of approximately 42 hours)². Additionally, participatory exercises such as this one build trust among stakeholders, thereby increasing cooperation and coordination opportunities in the long run.

Start up of the “UNCAC Participatory and Representative Self-Assessment” project was made public on 10 May 2012 at an event presided over by the Comptroller General of the Republic, Mr. Ramiro Mendoza, and the Coordinator of the UN System in Chile and UNDP Resident Representative, Mr. Antonio Molpeceres. Practical steps taken to conduct stakeholder working groups are described in detail in Annex I Methodology.

This report provides a description of the key outcomes of discussions held at the aforementioned working groups.

2 This also sets this process apart from other international initiatives, because according to comparative research, interest groups meet only a few times as spectators and there is not as much time for debating among stakeholders.

General Introduction

The “United Nations Convention against Corruption (UNCAC)” Participatory and Representative Self-Assessment” project in Chile is a joint effort carried out by the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR) and the United Nations Development Program (UNDP). The objective of the project was to access preventive anti-corruption policies in Chile with regard to requirements established under Chapter II Preventive Measures of the UNCAC.

The UNCAC is one of the most important international instruments in the fight against corruption given the issues addressed therein. It represents a milestone in the global fight against corruption and implementation of regulations applicable to transparency, corruption prevention, recovering assets obtained through corruption, measuring public policies put into place, applying preventive measures in the private sector, promoting social control through citizen participation and fostering international cooperation. Moreover, it complements other international agreements on the matter such as the Organization of American States (OAS) Inter-American Convention Against Corruption (IACAC) and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business.

1 The UNCAC was signed on 9 December 2003 in Mérida, Mexico, welcoming the entry into force on 14 December 2005. The Convention has been signed by 160 countries and acceded to by 140, including Chile (on 13 September 2006).

CONTENTS

	General Introduction	4
	Project	5
<hr/>		
	Chapter II of the UNCAC	7
	Article 5 of the UNCAC	9
	Article 6 of the UNCAC	11
	Article 7 of the UNCAC	12
	Article 8 of the UNCAC	14
	Article 9 of the UNCAC	15
	Article 10 of the UNCAC	16
	Article 11 of the UNCAC	17
	Article 12 of the UNCAC	18
	Article 13 of the UNCAC	19
	Article 14 of the UNCAC	20
	Chapter II Conclusions	21
	Chapter V	
	Chapter V of the UNCAC	28
	Article 51 of the UNCAC	28
	Article 52 of the UNCAC	28
	Article 53 of the UNCAC	31
	Articles 54, 55 y 56 of the UNCAC	32
	Article 57 of the UNCAC	33
	Article 58 of the UNCAC	34
	Article 59 of the UNCAC	34
	Chapter V Conclusions	35
	Attachment I. Methodology	37
	Attachment II. Statistics	47
	Attachment III. Awareness Campaign	55
	Role of Public Institutions in Chile in Asset Recovery	26
	Introduction to Chapter V	25
	State Defense Council (CDE)	26
	Office of the Comptroller General of the Republic (CGR)	26
	General Directorate of Collateral Loans (DICREP)	26
	Judiciary	27
	Financial Analysis Unit (UAF)	27
	Public Prosecutor's Office (PP)	27

This book is funded by the Democratic Governance Thematic Trust Fund (DGTF) of the United Nations Development Program (UNDP)

**UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)
PARTICIPATORY AND REPRESENTATIVE SELF-ASSESSMENT IN CHILE**

Chapter II and V Review

First Edition: 2014

ISBN: 978-956-7469-58-1

**PROJECT "UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)
PARTICIPATORY AND REPRESENTATIVE SELF-ASSESSMENT"**

United Nations Development Program

Dag Hammarskjöld 3241.

Phone: (56-2) 2654 1000. Santiago - Chile.

Author

Rocio Noriega

Edition

Mauricio Muñoz y Patricia Arriagada

Design

David Barake

Original Version in Spanish

Translated by Hollie Lawton

Printed in Chile

Views expressed in this publication do not necessarily reflect those of the UNDP. The information contained in this report may be used provided that the source is cited.



Chapter I and V Review

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) PARTICIPATORY AND REPRESENTATIVE SELF-ASSESSMENT IN CHILE

*Al servicio
de las personas
y las naciones*



Chapter II and V Review

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) PARTICIPATORY AND REPRESENTATIVE SELF-ASSESSMENT IN CHILE

*Al servicio
de las personas
y las naciones*

